

✕ Por el Sr. Juan Luis Oquendo H. \_\_\_\_\_

✕ **CODIFICACION DE LEYES Y  
ORDENANZAS MUNICIPALES**



**TESIS PREVIA AL GRADO DE DOCTOR EN JURIS-  
PRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES** \_\_\_\_\_

DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

Art. 14. El 15 de diciembre de cada año,  
las personas designadas por la ley a formar el  
Consejo del año siguiente, se reúnan en Junta  
Preparatoria, en la Sala \_\_\_\_\_ ( Conclusión )

(1) Nota de la Secretaría del Consejo sobre las  
de las disposiciones de este Reglamento en el caso de  
cambio, para que sea de conocimiento de todos los  
miembros de la misma. Ley de Régimen Municipal. Este  
Reglamento podrá considerarse como una parte o por  
una parte arropada al estatuto o carta Orgánica del  
municipio. En todo caso deberá ser sometido al voto  
del Ayuntamiento.



## CAPÍTULO TERCERO

REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL  
DE QUITO, EN EL CUAL SE REFUNDEN EL EXPE-  
DIDO EL 10 DE JULIO DE 1899 Y EL REFORMA-  
TORIO DE 16 DE JULIO DE 1913 (1)

El Concejo Municipal de Quito,

ACUERDA:

el siguiente Reglamento Interno:

### TÍTULO I

DE LA REUNION DEL CONCEJO

ÁREA HISTÓRICA

DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

Sección 1ª.

#### JUNTAS PREPARATORIAS

Art. 1º. El 18 de diciembre de cada año, las personas llamadas por la ley a formar el Concejo del año siguiente, se reunirán en Junta Preparatoria, en la Sala del Concejo, sin espe-

---

(1) Nota de la Secretaría del Concejo: «Muchas de las disposiciones de este Reglamento no tienen aplicación, pues, han de ponerse de acuerdo con las disposiciones de la nueva Ley de Régimen Municipal. Este Reglamento puede considerarse como una pauta o norma para expedir el adecuado a cada Corporación Municipal». En todo caso véanse las referencias al final del Reglamento.



rar convocatoria, y elegirán un Director y Secretario ad-hoc de entre los miembros presentes.

Para que haya Junta Preparatoria bastará el número de tres Concejales.

Art. 2º. Esta Junta acordará las medidas oportunas, para que el día designado por la Ley a la instalación del Concejo, no falte el quorum respectivo; determinará, además, la hora de dicha instalación; los uniformes que llevarán en ella los Concejales, y otras circunstancias que juzgue conveniente.

Lo acordado se dará a conocer al Jefe Político para su cumplimiento.

Art. 3º. Si hasta dos días después del señalado por la ley para la instalación del Concejo faltare el quorum; la Junta Preparatoria apremiará a los miembros ausentes, con arreglo al Art. 16 de la Ley de Régimen Municipal; y si hasta el 23 de diciembre no concurriere el número suficiente de principales, la Junta o el Jefe Político llamará los suplentes, en el orden de sus nombramientos, y con éstos se iniciarán y continuarán las sesiones que concurren los principales.

ÁREA HISTÓRICA  
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

## Sección 2ª.

### DE LA INSTALACION DEL CONCEJO

Art. 4º. El Concejo Municipal se instalará cada año, presidido por el Jefe Político, quien, después de tomar la promesa constitucional a los Concejales presentes, declarará solemnemente instalado el Concejo Municipal. De seguida se procederá a nombrar un Secretario ad-hoc de entre los miembros de la Corporación, y luego al Presidente del Concejo.

Art. 5º. Elegido el Presidente prestará ante el Jefe Político la promesa de ley; pasará a ocupar su asiento y ordenará se dé lectura al informe del Jefe Político.



Art. 6º. Después, por actos sucesivos, se elegirá Vicepresidente, Secretario y todos los demás empleados cuyo nombramiento esté atribuido al Concejo, por Leyes, Reglamentos y Ordenanzas municipales.

## TITULO II

### Sección 1ª.

#### DE LOS EMPLEADOS

Art. 7º. Después de los empleados que establece la Ley de Régimen Seccional tendrá el Concejo los que él determine en el presupuesto de cada año, o establezca por medio de ordenanzas.

Art. 8º. Todo empleado cuyo nombramiento corresponde al Concejo podrá ser, en cualquier tiempo, libremente removido, a menos que la Ley o las Ordenanzas respectivas dispusieran otra cosa.

Art. 9º. Las atribuciones de cada empleado serán las determinadas en la Ley, las Ordenanzas o Reglamentos especiales.

### Sección 2ª.

#### DEL PRESIDENTE

Art. 10. El cargo de Presidente durará un año contado desde el día en que deben comenzar las sesiones ordinarias. Caso de vacante, se procederá a una nueva elección, y entonces el elegido desempeñará el cargo sólo por el tiempo que debía durar su antecesor.

Art. 11. Son atribuciones del Presidente, además de las señaladas en el Art. 39 de la Ley de Régimen Municipal:

1ª. Convocar a sesiones y presidir en ellas después de preparados los trabajos de acuerdo con el Secretario;



2ª. Mantener el orden y decidir las cuestiones que acerca de él se susciten;

3ª. Firmar las actas del Concejo, sus Ordenanzas y Resoluciones, así como las comunicaciones oficiales y las órdenes de pago;

4ª. Calificar las excusas de los Concejales y otros empleados para no asistir a sus quehaceres o retirarse de ellos;

5ª. Asistir diariamente al despacho, a la hora que se fije de antemano en Secretaría;

6ª. Decidir por sí en todos los asuntos para los cuales le autoricen la Ley, las Ordenanzas o Resoluciones del Concejo;

7ª. Vigilar las Comisiones y excitarlas al pronto despacho de sus trabajos especiales;

8ª. Cuidar de que todos los empleados del Concejo desempeñen puntualmente sus deberes;

9ª. Imponer a los Concejales y demás empleados las multas prescritas por las Ordenanzas y este Reglamento;

10. Visitar el Archivo y más oficinas y establecimientos dependientes del Concejo, así como las escuelas, cárceles y obras públicas;

11. Comunicar a quien corresponda las resoluciones presidenciales y las del Concejo en sus propias expresiones;

12. Despachar las representaciones en que se pidan copias, documentos o certificados que hayan de franquearse de Secretaría; requisito sin el cual el Secretario no podrá dar documento alguno, público o privado;

13. Remover a los empleados omisos en el cumplimiento de sus deberes, y nombrar interinamente, hasta cuando lo haga el Concejo, con el carácter de definitivo, a las personas que deben reemplazarlos, debiendo el Presidente dar cuenta al Concejo del ejercicio de esta atribución, en la sesión inmediata;

14. Mandar trabajar todas las obras que fuesen a su juicio de carácter urgente y no exceda de cien sucres de costo;



15. En fin, desempeñar los deberes que le imponga el Concejo y dictar todas las providencias que, naturalmente, corresponde al cargo que ejerce.

Art. 12. Todas las disposiciones, resoluciones o decisiones del Presidente son apelables al Concejo y revocables por éste.

En este caso, el Presidente dejará su asiento, el cual será ocupado por el Vicepresidente, y, a falta de éste, por el Concejal designado por el Presidente.

Art. 13. Todas las contestaciones de palabra que correspondan al Concejo deberá darse por el Presidente.

Art. 14. Si durante las sesiones hubiere desorden en los departamentos contiguos a la Sala del Concejo o en la barra, el Presidente mandará despejarlos.

Art. 15. No puede el Presidente:

1º. Tomar parte en las discusiones, sin dejar previamente su asiento; y en este caso se estará a lo prescrito en el inciso 2º. del Art. 12; y

2º. Resolver por sí solo, sin previa autorización, las solicitudes particulares, comunicaciones oficiales dirigidas al Concejo, y más asuntos propios de éste.

Art. 16. Si a la hora designada para el principio de una sesión, no concurriere el Presidente, le subrogará el Vicepresidente, y, a falta de ambos, cualquier Concejal elegido por el Concejo.

Art. 17. El que accidentalmente subroga al Presidente, cumplirá todos los deberes que a dicho funcionario impone este Reglamento, por lo que hace a las sesiones, hasta que concurra el Presidente o Vicepresidente en su caso.



### Sección 3ª.

#### DEL VICEPRESIDENTE

Art. 18. Es aplicable al Vicepresidente, cuando se hallare subrogando al Presidente, lo dispuesto en el Art. 11 de este Reglamento.

Art. 19. Si la Presidencia estuviere vacante o el Presidente impedido de concurrir al Despacho, por enfermedad, licencia, etc., le subrogará el Vicepresidente, conforme a este Reglamento.

Para el efecto del inciso anterior, el Secretario se cerciorará previamente del impedimento del Presidente para concurrir al Despacho.

### Sección 4ª.

#### DEL SECRETARIO

Art. 20. No podrá ser nombrado Secretario ningún individuo del seno del Concejo.

Art. 21. El Secretario al entrar en posesión de su destino, además de prestar la promesa de que cumplirá fielmente con los deberes de su cargo, jurará guardar el debido secreto de las cosas reservadas.

Art. 22. Son deberes del Secretario, aparte de los que le impone la Ley.

1º. Redactar con precisión y claridad las actas del Concejo, anotando en ellas todas las cuestiones que se hubiesen suscitado. Las actas estarán concluidas de una sesión para otra.

2º. Repartir el trabajo entre los subalternos; formar, mes por mes, legajos, con el respectivo índice, de las comunicaciones oficiales, solicitudes de los particulares, informes de las comisiones y de las Ordenanzas y Acuerdos municipales.

3º. Formar anualmente la edición de las Ordenanzas municipales.



4º. Llevar los siguientes libros:

a) Copiador de comunicaciones oficiales del Concejo y órdenes de pago;

b) De conocimientos de los documentos que salgan de Secretaría, conforme al Reglamento;

c) Anotador de multas que se impusieren con arreglo a la ley y Ordenanzas municipales;

d) De promesas de Jueces civiles;

e) De promesas de empleados municipales;

f) El de actas de las sesiones del Concejo, que deberán estar autorizadas por el Presidente y Secretario.

g) Anotador de documentos que entren en Secretaría, con indicación del nombre de quienes lo dirigen, contenido del documento y resolución de la Presidencia;

h) De inventario general, de acuerdo con la Ley de Régimen Municipal;

i) Auxiliar del anterior, en el que consten el ingreso y egreso de las pertenencias del Municipio.

j) Anotador de contratos celebrados con particulares;

k) Índice de las actas de sesiones del Concejo, de las órdenes de pago y de las comunicaciones oficiales de la Presidencia a las autoridades particulares;

l) Además de estos libros se llevarán los que ordene el Concejo para el mejor servicio administrativo.

Art. 28. El Secretario del Concejo estará obligado a formar un protocolo bien encuadernado, foliado con su índice respectivo, de todos los Acuerdos, Ordenanzas y Resoluciones expedidos en cada año por la Municipalidad.

Art. 24. El Secretario recibirá todas las comunicaciones de las autoridades, las solicitudes de los particulares, los proyectos e informes de las comisiones; los numerará, y poniéndolos sus brevetes, los dará curso correspondiente.



Art. 25. Será responsable el Secretario de todos los papeles y documentos que esten a su cargo, hasta que los entregue por inventario.

Art. 26. Para cumplir con el deber de llevar el libro de inventarios, el Secretario exigirá a los Profesores de las Escuelas Municipales, Médicos, Juez de Rastro, Bibliotecario y más empleados de las Oficinas municipales, inventario prolijo de los muebles y demás objetos pertenecientes al Municipio.

Art. 27. Es prohibido al Secretario:

1º. Entregar a los particulares, sin orden del Presidente, papel alguno perteneciente al Archivo o a los Concejales sin el respectivo conocimiento;

2º. Conferir, sin la predicha orden, copias de los Acuerdos, Ordenanzas o Resoluciones municipales, de las actas del Concejo y de las promesas de los empleados, etc.;

3º. Tomar parte en las discusiones; y

4º. Ocupar al Oficial Mayor, y demás empleados dependientes del Secretario, en asuntos diversos del servicio público.

Art. 28. Los empleados de Secretaría concurrirán a la Oficina todos los días hábiles de 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m., y por la noche cuando se convocare a sesión.

Concurrirán, así mismo, en cualquier día y hora, cuando al efecto ordenare el Presidente o el Concejo en caso de urgencia o de pública necesidad.

### Sección 5ª.

#### DEL OFICIAL MAYOR, AMANUENSES Y OTROS EMPLEADOS

Art. 29. En caso de falta o impedimento accidental del Secretario, el Oficial Mayor hará sus veces.

Art. 30. El Oficial Mayor cuidará de una manera especial de que los amanuenses desempeñen exactamente sus deberes y además será



responsable de los objetos que forman el ajuar de la Secretaría Municipal, así como de los papeles y documentos pertenecientes al Archivo y que se encuentran en su poder o en el de los amanuenses con ocasión del trabajo. Esta responsabilidad se entiende, sin perjuicio de lo establecido en el Art. 25 de este Reglamento.

Art. 31. Los amanuenses estarán sometidos al Secretario en todo lo concerniente a la ejecución del trabajo que se les determinare; y cumplirán con las demás órdenes dictadas por Presidente, Secretario y Concejales, en asuntos relativos al servicio municipal.

Art. 31. El conserje vivirá en la Casa Municipal; cuidará de la seguridad interior y exterior de ella y cumplirá todas las órdenes que reciba del Presidente, Concejales y Secretario, relativas al servicio municipal.

Art. 33. Los porteros, además de estar sujetos al Art. 30, ejecutarán todas las órdenes dadas por el Presidente, Concejales y Secretario, en todos los asuntos relacionados con su empleo.

Art. 34. El Secretario y los demás empleados de que habla esta sección, estarán sujetos, por lo demás, a lo prescrito en el Reglamento Interno de la Secretaría.

### Sección 6ª.

#### DEL PROCURADOR MUNICIPAL

Art. 35. El Procurador Municipal, principal y suplente, serán elegidos de conformidad con la Ley, este Reglamento y las Ordenanzas respectivas.

Art. 36. El Procurador Municipal está obligado a asistir a la Secretaría, todos los días hábiles, a la hora que tuviere a bien, para cumplir con las obligaciones de su cargo.



Art. 37. El Procurador Municipal llevará un Cuadro comprensivo de los asuntos judiciales y administrativos que corran a su cargo.

Art. 38. El Procurador asistirá siempre, salvo excusa aceptada por el Presidente, a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo Municipal.

Art. 39. Supervigilará las obras públicas, y pondrá un VISTO BUENO en las planillas de material y trabajo, cuidando de su exatitud bajo su responsabilidad.

Art. 40. Corresponde al Procurador, además de las obligaciones impuestas por la ley y las Ordenanzas respectivas:

1º. Formar las minutas de los contratos de la Municipalidad, sujetándose estrictamente a las disposiciones dadas por el Concejo.

2º. Hacer personalmente el cotejo de inventarios de los bienes pertenecientes a cada oficina o establecimientos sujetos al Concejo, y suscribirlos con el Jefe de la Oficina respectiva. Un ejemplar de éstos, que extenderá por duplicado, entregará al Secretario.

### Sección 7ª.

#### DEL TESORERO

Art. 41. El Tesorero será elegido por el Concejo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Régimen Municipal.

Art. 42. Los deberes de este empleado, además de los determinados en la expresada ley, la Orgánica de Hacienda y las Ordenanzas del caso, son los que a continuación se enumeran:

1º. Permanecer en la Oficina de la Tesorería todos los días hábiles, de 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m.

2º. Concurrir al despacho en cualquier día y hora, siempre que así lo exigieren las obli-



gaciones de su cargo, el Presidente o el Concejo Municipal; y

3º. Asistir puntualmente a todas las sesiones del Concejo.

Art. 43. El Tesorero gozará del sueldo o tanto por ciento que se le asigne anualmente en el Presupuesto general de gastos, de acuerdo con el Art. 52 de la Ley de Régimen Municipal.

Art. 44. La contabilidad administrativa del Municipio, se organizará por una Ordenanza especial.

### Sección 8ª.

#### DE LOS CONCEJALES

Art. 45. Los Concejales estarán obligados a asistir puntualmente a todas las sesiones del Concejo, ordinarias o extraordinarias, para que fuesen citados.

Art. 46. Ningún Concejal durante la sesión podrá dejar su asiento ni ausentarse de la sala, sino con causa justa y permiso expreso del Presidente.

En el acta del día se hará constar el nombre del Concejal que se retiró, especificando si lo ha hecho con permiso o infringiendo la disposición de este artículo.

Art. 47. Asimismo estarán obligados a asistir cuando fueren convocados a las comisiones por el Presidente de éstas.

Art. 48. El Concejal que no pudiere cumplir con las obligaciones que anteceden, deberá excusarse con anticipación. De otra manera, o si la excusa no fuere justa, el Presidente del Concejo le impondrá la multa de uno a cuatro sucres.

En caso de negligencia del Presidente, impondrá esta multa el Concejo.



Art. 49. Los Concejales están obligados a guardar sigilo en los negocios que se hubiesen tratado en sesión secreta.

Art. 50. Los Concejales despacharán los asuntos que se les haya pasado para que informen, en el período de tiempo que media de una sesión ordinaria a otra. El Presidente o el Concejo ampliarán o restringirán este plazo.

Art. 51. Todos los demás empleados municipales, que por ley, Ordenanza o Acuerdo deban asistir a las sesiones, estarán obligados bajo la sanción que se determina en el Art. 48.

### TITULO III

#### Sección 1ª.

Art. 52. Habrá una sesión ordinaria en cada semana, en el día que acuerde el Concejo.

Habrá, también, sesiones ordinarias del 20 al 30 de diciembre de cada año, para cumplir con lo prescrito en el Art. 14, inciso 2º. de la Ley de Régimen Municipal.

El Presidente o el Jefe Político concurrirán a las sesiones extraordinarias cuando las circunstancias lo exigieren o lo pidiere algún Concejal.

Art. 53. Las sesiones serán públicas y por la noche, a no ser que el Presidente creyere necesario tengan lugar durante el día, en caso urgente.

Art. 54. La sesión será secreta, cuando por la naturaleza del asunto de que haya de tratarse, lo dispusiere el Presidente o lo solicitare algún Concejal.

En estas sesiones se decidirá previamente si el asunto merece reserva o no.

Art. 55. El Concejal que tome la palabra se pondrá de pie, se dirigirá al Presidente, y hablará en términos respetuosos.



Art. 56. Si el Presidente no llamare al orden, cualquiera de los miembros presentes podrá pedir al Presidente que cumpla con su deber.

Art. 57. Todo asunto, para ser discutido, deberá tener como base un proyecto o una proposición.

La moción deberá estar necesariamente apoyada por un Concejal y concebida en términos que se presten para la discusión. Sin estos requisitos no podrá discutirse proposición alguna.

Art. 58. Hecha una moción, no se tratará de otra hasta que se haya resuelto; a menos que sea para modificarla o diferir su discusión.

Art. 59. Puesta ya en debate una moción, podrá su autor retirarla o reformarla, siempre que lo consienta la mayoría absoluta del Concejo.

Art. 60. Mientras se discute una moción, no podrá hacerse otra, exceptuándose los casos siguientes:

1º. Si la moción versa sobre un asunto previo;

2º. Si se encamina a conseguir que se suspenda el debate de la moción principal, hasta cierto indefinido día;

3º. Si por ella se dispone que el asunto de la moción anterior, pase a una comisión, antes de que se la tome en cuenta;

4º. Si es modificatoria de la principal; y

5º. Si la adiciona.

Todas estas mociones se discutirán en el orden que se encuentren en este artículo.

Art. 61. Las mociones que no tuvieran relación con la que se discute en los términos que indica el artículo anterior, deberán reservarse para tratarse después.

Art. 62. La moción que ha sido una vez negada, no podrá repetirse dentro del año en que ocurrió la negativa, a no ser que fuese esencialmente modificada.



Art. 63. No podrá tomar parte en la discusión, ni votar el Concejero que tuviere interés personal en el asunto de que se trata; o cuando lo tuviere su ascendiente, descendientes o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Esta disposición se extiende a los casos de elección de empleados, siempre que se trate de candidatos conocidos; entendiéndose por tales aquellos a quienes deba concretarse la elección según el caso del Art. 3º.

Art. 64. Ningún Concejal puede hablar más de dos veces sobre la misma cuestión. Sin embargo, si alguno creyere que lo que ocurre después importa mucho para ilustrar la cuestión, o que en el concurso del debate se han desfigurado sus proposiciones, puede, previa esta exposición, y el Presidente del Presidente, tomar la palabra de nuevo para aquel solo objeto y por una sola vez. Mas el autor de la moción tomará la palabra hasta por tres veces, además de la que puede permitirle el Presidente.

Art. 65. Levantándose dos o más Concejales para tomar la palabra, la tendrá el que lo ha hecho primero. En caso de duda, decidirá el Presidente, quien indicará el que debe hablar, prefiriendo al que no lo haya hecho todavía en el asunto que se discute.

Art. 66. Cuando concurriere a las sesiones el Jefe Político o cualquiera otro de los empleados municipales, tomarán asiento el primero a la derecha del Presidente, y los otros entre los Concejales; pero ninguno de ellos podrá tomar parte en la discusión. Con todo, pueden informar, en los casos permitidos por la ley o acordados por el Concejo.

Art. 67. Cualquier ciudadano puede tomar la palabra con permiso del Concejo.



## Sección 2ª.

### DE LAS CITACIONES

Art. 68. El Jefe Político del Cantón convocará a cada uno de los Concejeros para la primera de las sesiones ordinarias de cada trimestre, por medio de una nota, cuya cubierta será devuelta firmada por el Concejal que la reciba.

Podrá también, en la misma forma, convocar a sesión extraordinaria, de acuerdo con el Art. 14 de la Ley de Régimen Municipal.

Art. 69. Las demás sesiones ordinarias o extraordinarias, serán convocadas por el Presidente del Concejo, por medio de una sola nota, al pie de la cual estarán obligados a firmar los Concejales que fuesen citados.

Esta citación se hará seis horas, por lo menos, antes de la señalada para la sesión, pero nunca antes de la víspera.

Art. 70. Los Concejales están obligados a firmar al pie de la nota de convocatoria para comprobación de que han sido citados a sesión; así como también deben firmar el recibo o conocimiento en el libro, cuando se les entregue los documentos en comisión.

Art. 71. Si el Jefe Político o Presidente del Concejo no convocare las sesiones ordinarias en las épocas designadas por la ley y por el Reglamento, los Concejeros podrán principiarlas por sí solos, debiendo en todo caso mandar hacer las citaciones el primer Concejal, en su falta, el segundo, y así en adelante.

## Sección 3ª.

### DEL ORDEN EN EL DESPACHO DE LOS ASUNTOS

Art. 72. Después de leída y aprobada el acta de la sesión anterior, el Secretario pondrá al Despacho:



1º. Las comunicaciones de los Ministros Secretarios de Estado y Tribunales de Justicia.

2º. Las del Jefe Político o Gobernador de la Provincia.

3º. Las que dirijan al Concejo las demás Autoridades, como también los empleados del Concejo.

4º. Los Proyectos de Acuerdos u Ordenanzas, así como las Resoluciones que no hayan sido antes definitivamente aprobadas; atendiendo siempre a su antigüedad e importancia.

5º. Los informes de las Comisiones; y

6º. Las peticiones, memorias o representaciones.

Art. 73. En el despacho de las solicitudes particulares, se seguirá el orden de antigüedad, salvo que alguna de ellas se relacione con asuntos de interés público; pues, en tal caso, ésta será conocida con preferencia a las otras, si así lo pide cualquier Concejal y el Concejo consienta en ello.

Art. 74. El Presidente podrá alterar el orden establecido en el Art. 72, siempre que así lo exigiere la pública utilidad.

Art. 75. Si en una sesión hubiere quedado pendiente la resolución de algún asunto, se tratará precisamente de él en la inmediata siguiente, tan luego como se hubiere leído las comunicaciones de las Autoridades y empleados municipales, a no ser que el Concejo resolviera lo contrario.

Art. 76. El Concejo puede declarar urgente cualquier Proyecto de Ordenanza, y, en tal caso se discutirá en tres sesiones consecutivas.

Art. 77. Los documentos relativos a los asuntos en que tenga de ocuparse el Concejo, estarán de manifiesto sobre la mesa del Secretario.



## Sección 4ª.

## DE LOS DEBATES

Art. 78. La simple lectura de un Proyecto de Ordenanza o Acuerdo valdrá por primera discusión, siempre que el Proyecto hubiese sido presentado por el Jefe Político, Procurador, una Comisión o por un Concejal.

Tanto en esta discusión, como en la segunda, los Concejeros podrán hacer las observaciones o las indicaciones que creyeran oportunas, pero éstas se reservarán para la última discusión.

Art. 79. La segunda discusión se verificará con una sesión ordinaria de por medio entre ésta y la primera. El Secretario leerá el Proyecto artículo por artículo, y se discutirán una por una las disposiciones.

Art. 80. La tercera discusión se efectuará, así mismo, con una sesión ordinaria de por medio entre éstas y la segunda. El Proyecto será, también, leído y discutido artículo por artículo, para su aprobación, modificación o suspensión. Concluida la discusión de cada artículo, el Presidente preguntará si se aprueba o no.

Art. 81. Una sola discusión bastará para los asuntos que no tengan carácter permanente y no necesiten de la sesión ejecutiva. Los demás deberán sujetarse a lo prescrito por las leyes y este Reglamento.

Art. 82. Para reconsiderar o revocar una disposición o Proyecto aprobado en todas sus partes, es necesario el voto de las dos terceras partes de los Concejales presentes; pero esta revocatoria o reconsideración, no podrá pedirse sino en la misma sesión o en la inmediata siguiente, dentro de cada período anual de sesiones ordinarias.



## Sección 5ª.

## DE LAS VOTACIONES

Art. 83. Antes de votarse un Proyecto de Ordenanza, Acuerdo o Resolución, el Presidente resolverá que se halla suficientemente discutido; y anunciado que se va a cerrar el debate, lo declarará terminado.

Art. 84. Cerrada la discusión, el Secretario leerá el artículo, proyecto o moción discutidos: el Presidente exigirá el voto del Concejo, el que, después de regulado por el Secretario, será publicado por éste.

En caso de que el Secretario se equivoque al regular la votación, cualquier Concejal podrá pedir que se la rectifique, aún después de publicada.

Art. 85. Los Concejeros expresarán su voto, levantándose los que estuvieren por la afirmativa, y permaneciendo sentados, los que estuvieren por la negativa.

La votación será nominal, cuando así lo pida el Presidente o uno o más Concejales.

Art. 86. Para la aprobación de los asuntos que, según la Ley o este Reglamento, no se exija el voto de las dos terceras partes, bastará el de la mayoría absoluta de los miembros presentes.

Art. 87. Si resultare empatada la votación, se suspenderá la decisión del asunto, hasta la sesión inmediata.

Art. 88. No podrán votar los Concejeros que no hubieren asistido a la discusión, ni excusarse de votar los que la presenciaren.



## TITULO IV

## Sección única

## DE LAS COMISIONES

Art. 89. Todo asunto en que deba ocuparse el Concejo, puede pasar a una Comisión permanente u ocasional, por resolución del Presidente o del Concejo.

Habrà, además, Comisión general en los casos determinados por la Ley, este Reglamento y las Ordenanzas respectivas.

Art. 90. El primer día la Comisión de la Mesa, compuesta del Presidente, un Concejal nombrado por la Corporación y el Secretario Municipal, procederà a distribuir las Comisiones permanentes entre todos los miembros del Concejo.

Art. 91. Cada Comisión permanente será compuesta de tres miembros de la Municipalidad, y hará de Presidente el primeramente nombrado, según consta del Cuadro de Comisiones que debe haber en Secretaría.

Art. 92. Las Comisiones permanentes serán tantas, cuantas, a juicio de la Mesa, sean necesarias para la inspección especial e inmediata de los diversos ramos que corresponden al Municipio.

Art. 93. Las Comisiones ocasionales serán nombradas por el Presidente, a no pedir algún Concejal que las nombre el Concejo.

Art. 94. Las Comisiones manifestarán su dictamen sobre las materias sometidas a su juicio, por un informe escrito, al que seguirá, si creyere necesario, el respectivo proyecto de Acuerdo u Ordenanza.

Art. 95. Cada uno de los miembros de una Comisión permanente, podrá presentar el informe respectivo en el asunto que se le hubiere pasado; y bastará que el informe se halle firmado por uno de sus miembros, para que



sea tomado en cuenta y discutido por el Concejo.

Se exceptúan los asuntos pasados a la Comisión a que estudien todos sus tres miembros. En este caso, el asunto deberá pasar al Presidente de la misma.

Art. 96. Cada uno de los miembros de una Comisión permanente tendrá la facultad de solicitar que ésta se reúna, por la naturaleza del asunto que se tiene que tratar así lo requiera.

Art. 97. Los informes que de una Comisión unida deben ir firmados por todos sus miembros; pero si alguno de ellos fuere de opinión contraria a la de los otros, presentará su dictamen por separado.

Art. 98. Tan luego como se presente en Secretaría alguna petición que deba pasar a una Comisión permanente, el Presidente pondrá el respectivo Decreto, sin necesidad de poner aquélla en conocimiento del Concejo.

Art. 99. El Secretario repartirá el trabajo de los asuntos que pasen a una Comisión permanente, entre los miembros de ésta, por iguales partes; observando el turno correspondiente.

Art. 100. Los Concejales no pueden negarse al desempeño de una Comisión sin justa causa, calificada por el Presidente.

Art. 101. Toda Comisión deberá presentar su informe en el término que le señala este Reglamento, el Presidente o el Concejo.

Art. 102. La infracción de cualquiera de los tres artículos precedentes, se castigará con una multa de uno a cuatro sucres, impuesta por el Presidente; sin perjuicio de que también el Concejo haga la imposición, si notare descuido u omisión en el Presidente.

Art. 103. Las Comisiones podrán pedir al Secretario, o, por medio de éste, los documentos o antecedentes que creyeran necesarios para el despacho de los asuntos de su incumbencia; y, si fuese preciso solicitarlos de una



autoridad extraña al Municipio, lo harán por medio del Presidente.

Art. 104. El Concejo se reunirá en Comisión General para acordar los proyectos de Ordenanza sobre nuevos impuestos; para aumentar o disminuir la escala de los ya establecidos; para formar el Presupuesto general, y en todos los casos en que juzgare conveniente la mayoría absoluta del Concejo.

Art. 105. Cuando el Concejo haya de reunirse en Comisión General, el Presidente designará un Concejero que la presida, haciendo de su Secretario el mismo del Concejo. El Presidente del Concejo dejará su asiento, que será ocupado por el de la Comisión.

Art. 106. Las reglas para el orden de las sesiones y debates, son aplicables a las Comisiones generales; pudiendo, empero, los Concejeros hablar sentados y cuantas veces creyeren necesario hacerlo para ponerse de acuerdo.

Concluida la Comisión General, el Presidente de ella informará al Concejo sobre su resultado.

ÁREA HISTÓRICA  
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

## TITULO V

### Sección única

#### DE LAS ELECCIONES

Art. 107. Tan luego como se instale el Concejo Municipal, en cada año, procederá, en sesiones sucesivas, a elegir, por escrutinio secreto y mayoría absoluta de votos, los siguientes empleados: Presidente y Vicepresidente del Concejo; Secretario, Oficial Mayor, Tesorero, Procurador Municipal, Alcaldes y Comisarios Municipales, Anotador de Hipotecas y los Defensores Públicos.

Las demás elecciones que, según la Ley o las Ordenanzas correspondenden al Concejo



Municipal, se harán nominalmente, o en la forma que el mismo Concejo determine.

Art. 108. Para las elecciones secretas se nombrarán dos escrutadores, uno por el Presidente y otro por el Concejo. Los nombrados tomarán asiento junto a la mesa presidencial.

Art. 109. La elección por escrutinio secreto se hará por medio de células que recogerá el Secrerario dobladas y sin leerlas.

Se prohíbe los votos en blanco y los firmados.

Art. 110. Recogidos los votos, el Secretario los contará en voz baja y a presencia del Presidente y escrutadores; y si el número que resultare fuere mayor o menor que el de los Concejales presentes, se repetirá la votación.

Art. 111. Contados los votos, los leerá el Secretario uno por uno y en alta voz; tomarán razón de ello ambos escrutadores, uno de los cuales publicará su resultado. Si no hubiere elección, se repetirá la votación contrayéndose a los que hubiesen obtenido mayor número de votos: en caso de empate, decidirá la suerte.

Art. 112. Hecho un nombramiento, podrá revocarse o reconsiderarse, en la sesión siguiente, si así lo resuelve el voto de las dos terceras partes de los Concejales presentes.

## TITULO VI

### DISPOSICIONES COMUNES

Art. 113. Siempre que se pidiere copia de las piezas o documentos pertenecientes al Archivo Municipal, el Presidente ordenará, si no tuviere alguna razón para negarla, que el Secretario la confiera.

En caso de negativa, el interesado podrá apelar al Concejo. Será de cargo del peticionario el pago del amanuense.

Art. 114. Ningún Acuerdo u Ordenanza podrá pasarse al Jefe Político, sino después que



el Concejo declare que el ejemplar que debe remitirse, se halle en todo conforme a lo acordado por él, y una vez que expire el plazo dentro del cual pueden ser revocados y reconsiderados.

Mientras no transcurra ese plazo, tampoco podrá comunicarse a los particulares ninguna elección o nombramiento que se hubiere hecho, a menos que se declare urgente tal elección o nombramiento.

Pero cuando algún asunto hubiere sido declarado urgente deberá dársele curso inmediato.

Art. 115. Quedan derogados todos los Reglamentos anteriores.

Dado, etc., etc.



ÁREA HISTÓRICA  
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL



## REFERENCIAS

### Ley de Elecciones

Al Art. 1º.

Art. 50, inc. 2. Con dicho nombramiento, se presentarán los elegidos a tomar posesión de sus cargos ante el Jefe Político del Cantón, en día primero de diciembre, fecha en la cual tendrá su primera reunión el nuevo Concejo y procederá a elegir a los dignatarios y más empleados conforme a la Ley de Régimen Municipal. Dichos empleados se posesionarán en primero de enero.

### Ley de Régimen Municipal

Al Art. 3º.

Art. 15. Los que habiendo sido elegidos Concejales no concurrieren oportunamente, sin causa justificativa, a tomar posesión de sus cargos, o no asistieren al Concejo después de negada la excusa o renuncia, incurrirán de hecho en la pérdida de los derechos de ciudadanía, durante un año, y el Jefe Político les aplicará la multa de CINCUENTA A CIENTO SUCRES.

ÁREA HISTÓRICA  
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

### Código Penal

Art. 116. El funcionario público que, tocándole como a tal el cumplimiento y ejecución de una ley, reglamento u orden superior que legalmente se le comuniqué, no los cumpla y ejecute, o no los haga cumplir y ejecutar en su caso, por morosidad, omisión o descuido, será castigado con una multa de ochenta a ciento sesenta sucres.

### Ley de Elecciones

Art. 53. A falta de la mayoría o cuando el Concejal cantonal cese en sus funciones, por excusa o inhabilidad de sus miembros, el Jefe Político lo integrará llamando a los suplentes, para que, a su vez pueda el Concejo cumplir con lo preceptuado en el artículo anterior; y si ni aún así pudiere integrarse la Corporación, el Consejo Provincial, previo informe del Jefe Político, nombrará el número de Concejales que falte para constituirlos, los cuales durarán en sus car-



gos hasta la próxima elección popular, sin perjuicio de que se aplique entonces lo dispuesto en el Art. 46.

### Ley de Régimen Municipal

Al Art. 2º.

Art. 50. Todos los empleados municipales, inclusive el Procurador, Secretario y Tesorero, son de libre nombramiento y remoción del Concejo, según los casos; podrán durar en sus cargos por tiempo indeterminado, siempre que consten su buen desempeño y corrección.

Los empleados municipales tendrán derecho a sueldo hasta que sean legalmente reemplazados.

Art. 42. Todo Concejo Cantonal, elegirá de su seno un Presidente y un Vicepresidente, los cuales durarán un año, a contar desde el 15 de diciembre. Dichos dignatarios se posesionarán de los cargos y prestarán la promesa de estilo ante la Corporación, siendo nulos los actos de los Concejos en que intervengan sin aquella formalidad.

Al Art. 10

### Ley de Elecciones

Al Art. 11, 4)

Art. 51. Compete al Concejo conocer de las excusas e incompatibilidades de sus miembros, declarar vacantes los cargos cuando haya motivo legal y llamar a los Concejales suplentes.

(Nos referimos a la nota del Art. 8º.)

Al Art. 13

### Ley de Régimen Municipal

Art. 44 y sus incisos.

Art. 46. El Vicepresidente reemplazará al Presidente en todos los casos que éste faltare.

Al Art. 18

Art. 47. Son nulos los actos del Vicepresidente en los que no conste por escrito la razón de la falta o impedimento del Presidente, sin perjuicio también de la correspondiente responsabilidad de aquél.

Arts. 56, 57 y 58.

Al Art. 35

Arts. del 59 al 68.

Al Art. 41

Arts. del 11 al 16.

Al Art. 45

Arts. del 25 al 30.

Al Art. 68

Art. 128. Los Archivos de las Municipalidades son públicos. Por consiguiente las actas, con excepción de las secretas, los libros y más documentos de las mismas, pueden ser examinados por cualquier persona, y darse copia mediante decreto del Jefe de ella.

Al Art. 113

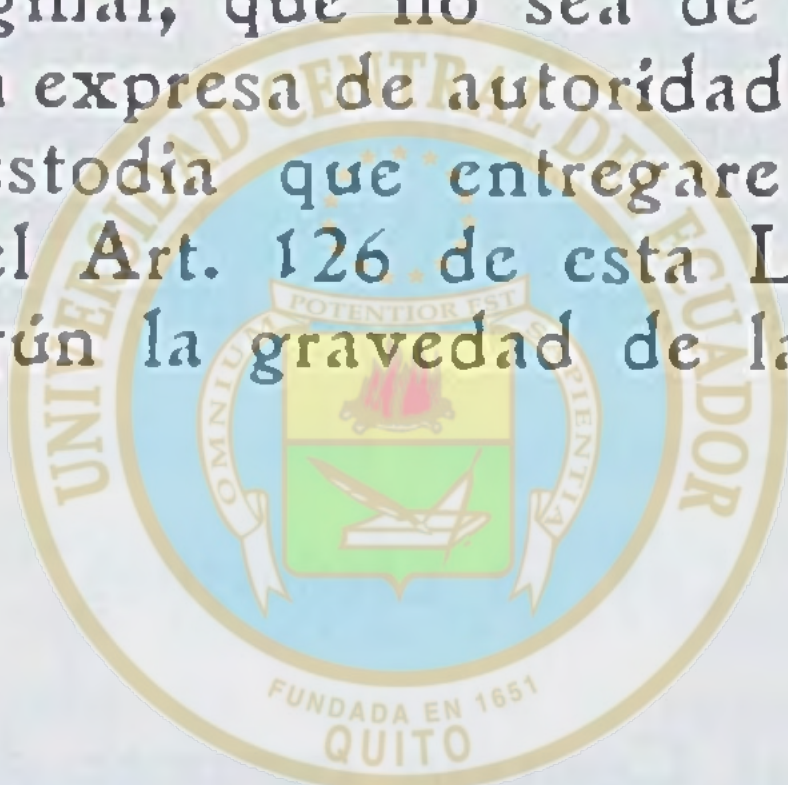


## Ley de Régimen Administrativo Politico

Art. 131. Sólo mediante decreto del Jefe de Oficina, puede conseguirse copia de los documentos pertenecientes a ella. Toda infracción de esta regla será castigada administrativamente, con una multa graduada hasta la totalidad de un sueldo mensual, pudiendo, además, imponerse la destitución del cargo, según la gravedad de la falta.

El Jefe de la Oficina no podrá negar la copia pedida, sino cuando lo exija grave motivo de conveniencia pública. De la negativa podrá recurrir el interesado ante el respectivo superior.

Se prohíbe igualmente, que los particulares saquen de un archivo u oficina del orden administrativo cualquier documento original, que no sea de su pertenencia, ni aún con orden expresa de autoridad superior, y el encargado de su custodia que entregare incurrirá en la pena prevista en el Art. 126 de esta Ley, en la destitución del cargo, según la gravedad de la falta.



ÁREA HISTÓRICA  
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL



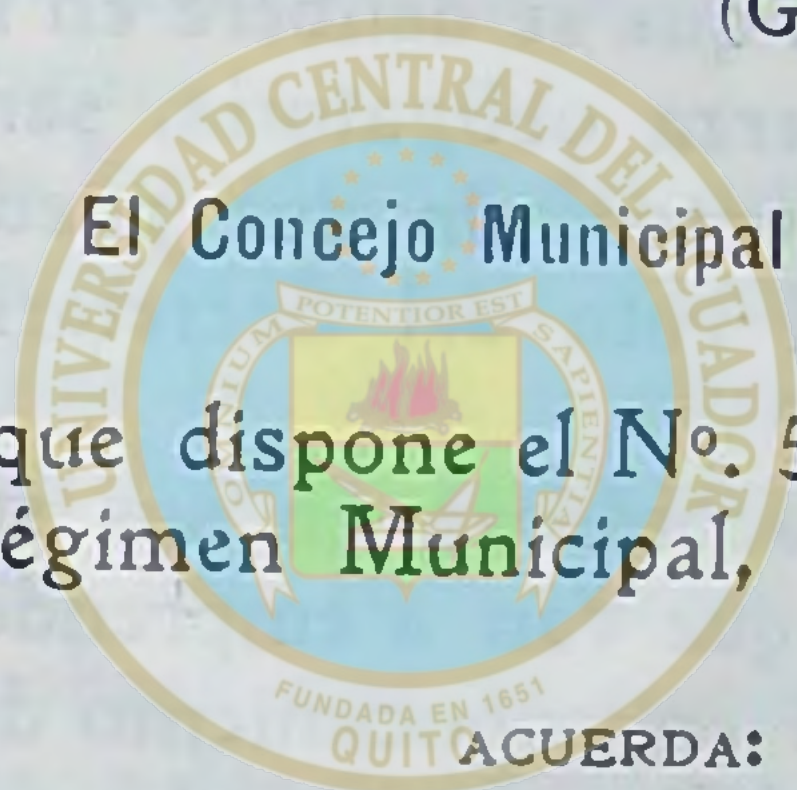
## CAPITULO CUARTO

### REGLAMENTO DE LAS JUNTAS PARROQUIALES

(G. M. N°. 61.—Pág. 103)

El Concejo Municipal de Quito,

A virtud de lo que dispone el N°. 5 del Art. 70  
de la Ley de Régimen Municipal,



ACUERDA:

ÁREA HISTÓRICA

DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

El siguiente Reglamento conforme al cual  
se regirán las Juntas de las Parroquias Rurales.

## CAPITULO I

### ORGANIZACION DE LAS JUNTAS

Art. 1. En cada parroquia rural habrá una Junta compuesta del Teniente Político, el Maestro de Escuela y un vecino del lugar, a quien lo elegirá anualmente el Concejo.

Art. 2. El miembro que faltare de la Junta, será reemplazado por el respectivo suplente.

Art. 3. Las Juntas elegirán el 1°. de enero de cada año su Presidente y Secretario, el cual será precisamente extraño a ellas.



## CAPÍTULO II

## DE LOS DEBERES DE LAS JUNTAS

Art. 4. Es deber de las Juntas cooperar con el Concejo Municipal en orden a la buena ejecución de las obras parroquiales, para cuyo objeto sesionarán obligatoriamente tres días en cada mes, y siempre que tengan por conveniente, previa convocatoria de su Presidente.

Art. 5. Las sesiones serán públicas, a menos que hubiere necesidad de tratar secretamente de algún asunto o la Junta resolviera lo contrario por mayoría de votantes.

Art. 6. Todo asunto que se delibere en la Junta, para que tenga fuerza obligatoria, será resuelto por mayoría de votos, sin que pueda contarse, en este caso, el voto del Secretario que sólo será informativo.

Art. 7. Las Juntas acordarán en sus sesiones, las obras públicas que van a emprender y su resolución se pondrá en conocimiento del Concejo, juntamente con el Presupuesto de costo para que se bote la cantidad necesaria.

Art. 8. Concedida la autorización por el Concejo, las Juntas se entenderán en mandar ejecutar las obras, siendo obligación de cada uno de sus miembros el inspeccionarlas personal y diariamente, sin remuneración alguna.

Art. 9. No podrán las Juntas emprender en otras obras que en las siguientes: 1º. Edificios para Escuelas; 2º. Cárceles; 3º. Construcciones para agua potable; y 4º. Obras de interés local.

Art. 10. En ningún caso podrá alterarse el orden establecido en el artículo anterior, salvo el de un motivo justo y racional que lo apreciará la Junta.

Art. 11. Si una obra pública parroquial debe ejecutarse por licitación y ésta se halla abierta, los interesados presentarán sus propuestas ante la respectiva Junta, la cual las



remítirá al Concejo con el informe correspondiente. En todo caso las bases de la licitación serán formuladas por las Juntas y aprobadas por el Concejo Municipal.

Art. 12. No se dará principio a los trabajos de obras públicas en las parroquias rurales del Cantón, sino cuando las obras han sido autorizadas por el Concejo y aprobado el Presupuesto de Gastos.

Art. 13. Los miembros de las Juntas serán solidariamente responsables de los perjuicios que sobreviniere al Municipio en la construcción de las obras de que se habla en este Reglamento, siempre que se les pueda imputar deficiencia en la información, falta de diligencia, u otra causa análoga.

Art. 14. Para los efectos del artículo anterior, el Concejo nombrará una Comisión que se encargue de recibir la obra u obras sometidas al cuidado de las Juntas, pudiendo imponer a éstas multas hasta del 20% sobre el valor total de la obra u obras que se ejecutan, sino se hallan conformes a las condiciones estipuladas en los contratos.

Art. 15. Si algún miembro de la Junta o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad tuvieren interés en las obras o asuntos de que se ocupa la Junta, será aquél reemplazado en la discusión y resolución por el suplente, de lo cual se dejará constancia en el acta respectiva.

### CAPITULO III

#### DE LOS FONDOS DE LA JUNTA

Art. 16. Son fondos de las Juntas parroquiales: las cantidades que el Concejo Municipal acuerde en el Presupuesto, los impuestos especiales que la Ley les asigne y los donativos que hicieren los vecinos de las parroquias favorecidas.



## CAPITULO IV

## DE LA INVERSION Y RECAUDACION DE LOS FONDOS

Art. 17. Los donativos que hubieren hecho personas particulares para obras públicas en determinadas parroquias, ingresarán a la Caja Municipal y el Tesorero los recaudará haciendo uso de las atribuciones que la Ley le franquea para la administración de los fondos municipales.

Art. 18. El Tesorero Municipal y el Presidente de las Juntas parroquiales quedan obligados a dar inmediato aviso al Concejo de los donativos a los cuales se refiere el artículo anterior, a fin de que esta Corporación ordene su inmediato ingreso en la Tesorería del Cantón.

Art. 19. Los vales que se presenten en Tesorería para el pago de las obras de que habla este Reglamento, llevarán el visto bueno del Presidente de la Junta que los ordenó, además de sujetarse a todas las formalidades que se determinan en la Ley de Hacienda y en la Ordenanza de Contabilidad.

## CAPITULO V

## SON DEBERES DE LOS PRESIDENTES DE LAS JUNTAS

Art. 20. 1º. Presidir la Junta y ordenar la ejecución de los Acuerdos y Resoluciones.

2º. Informar periódicamente al Concejo, del estado de las obras públicas que se trabajen en su respectiva parroquia;

3º. Firmar las actas y comunicaciones oficiales y contestar la correspondencia dirigida a la Junta;

4º. Cuidar de la exacta inversión de los fondos que el Concejo Municipal hubiere destinado a obras públicas de la respectiva parroquia; vigilar personalmente el pago de los salarios de los jornaleros, sobrestantes y más



trabajadores y cerciorarse del precio en que se hubiesen comprado los materiales de construcción; y

5º. Dar posesión de su destino al Secretario de la Junta.

## CAPITULO VI

### DE LOS DEBERES DEL SECRETARIO

Art. 21. Son deberes del Secretario:

1º. Redactar las actas de la Junta, llevar un libro de ellas y autorizar las copias que se remitan al Concejo.

2º. Autorizar las resoluciones que dictare la Junta; y

3º. Custodiar los libros, papeles y más útiles de la Secretaría.

Art. 22. A falta del Secretario de la Junta, actuará un Secretario ad-hoc nombrado por la misma, siempre que la falta del primero sea justificada y no exceda de tres meses; al exceder ese término se nombrará nuevo Secretario.

ÁREA HISTÓRICA

DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

## CAPITULO VII

### DISPOSICIONES GENERALES

Art. 23. El Presidente de la Junta podrá imponer de uno a cuatro sucres de multa al miembro que sin justa razón no concurriere a las sesiones ordinarias o extraordinarias a que ha sido convocado o que faltare al respeto debido a la Junta o cualquiera de sus miembros o a los demás deberes que impone el presente Reglamento.

Art. 24. Impuesta la multa por cualquiera de las causas antedichas, el Presidente de la Junta pondrá en conocimiento de la Jefatura Política y de la Tesorería Municipal del Cantón para que se le haga efectiva.



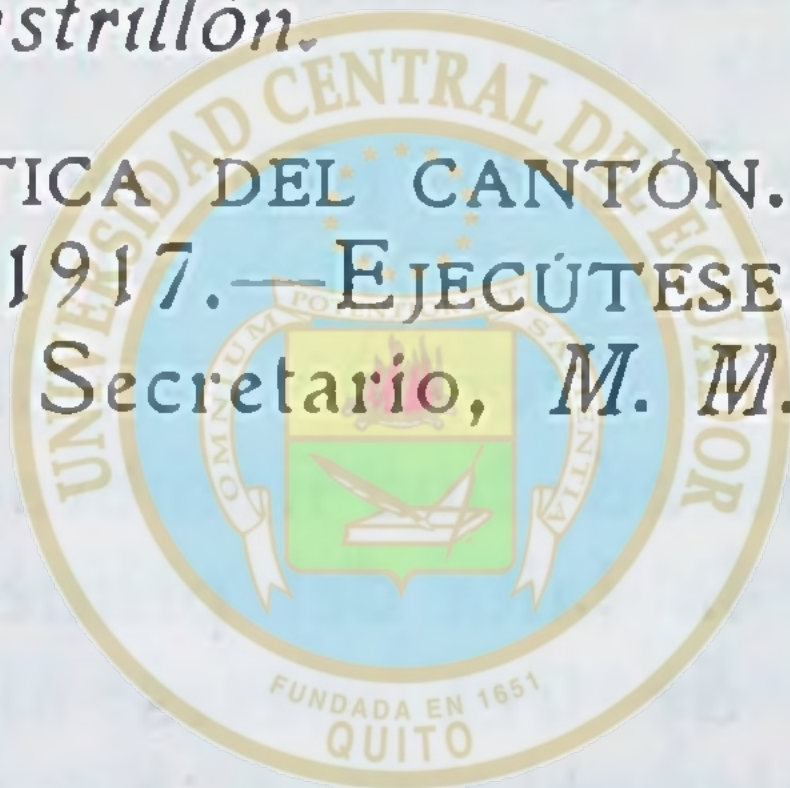
Art. 25. Si fuere el Presidente de la Junta el que faltase al cumplimiento de sus deberes, el Presidente del Concejo le aplicará la sanción establecida en el Art. 23, previo aviso de cualquiera de los miembros de la Junta.

Art. 26. Las multas que imponga el Presidente de la Junta Parroquial, se invertirán en gastos de escritorio de la misma.

Art. 27. El Presidente de la Junta será quien califique las excusas sobre asistencia del Secretario y más miembros de ella.

DADO en la Sala de Sesiones del I. Concejo Municipal, en Quito, a 24 de abril de 1917. El Presidente, *Juan F. Game*.—El Secretario, *Juan B. Castrillón*.

JEFATURA POLÍTICA DEL CANTÓN.—Quito, a 27 de abril de 1917.—EJECÚTESE. *Rafael Grijalva Polanco*. El Secretario, *M. M. Guerra*.



ÁREA HISTÓRICA  
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL



## REFERENCIAS

## Ley de Régimen Municipal

Art. 94. Los Concejos Cantonales invertirán el sesenta por ciento, por la menos, de todos los impuestos municipales que se cobren en una parroquia rural en beneficio exclusivo de la misma, dando preferencia a la construcción de edificios para la instrucción primaria y para cárceles y a la provisión de agua potable y otras obras que consideren de urgencia.

Se invertirán también en las parroquias los fondos que para ellas destinare el Concejo, de la Caja Municipal.

Los Tesoreros y Concejeros que no dieran cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, o contribuyeren con su voto para dar inversión distinta, serán pecuniaria y solidariamente responsables.

La Contraloría deberá hacer efectiva esta responsabilidad, sin perjuicio de la acción popular que se concede para tal objeto a cualquier vecino de la parroquia.

Art. 95. En cada parroquia rural se organizará una Junta compuesta del Teniente Político, del Maestro de Escuela y de un vecino elegido anualmente este último por el Concejo. Las Juntas elegirán un Secretario, si lo estimaren conveniente.

Las Corporaciones municipales, al tiempo de expedir la Ordenanza anual de gastos, cumplirán las disposiciones legales pertinentes y dispondrán la ejecución de las obras parroquiales, teniendo en cuenta el orden de preferencia establecido en el artículo anterior. Este orden podrá alterarse, si lo solicitare la respectiva Junta, fundándose en justo motivo.

Las Municipalidades formarán el Reglamento según el cual las Juntas de las parroquias rurales deberán proceder a su organización y atribuciones.

## Ley de Régimen Político Administrativo

## DE LOS TENIENTES POLITICOS

Art. 95. Para el régimen político y administrativo de las parroquias habrá en cada una de ellas, un Teniente Político principal y un suplente, quienes residirán en el centro poblado de la parroquia.



Art. 96. Los Tenientes Políticos son agentes inmediatos de los Jefes Políticos, a quienes estarán subordinados.

Art. 97. Los Tenientes Políticos publicarán en sus parroquias, las órdenes y resoluciones que les comunique el Jefe Político y cuidarán de que las obedezcan los ciudadanos. Debe cuidar, también, de la seguridad, aseo y salubridad públicos y proteger a la raza indígena.

Cuando el Teniente Político mandare comparecer a un ciudadano indicará, en la boleta citatoria, el objeto del llamamiento.

Prohíbese a los Tenientes Políticos y a sus subalternos el aislamiento para el trabajo de obras públicas. Exceptuándose los contratos voluntarios conforme a la Constitución.

Art. 99. Corresponde a los Tenientes Políticos cuidar de la conservación de las vías públicas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Caminos.

#### DE LAS JUNTAS PARROQUIALES

Art. 103. En cada parroquia rural funcionará una Junta Parroquial, que se formará del Teniente Político, que la presidirá, del Director de la Escuela y de un propietario designado por el respectivo Concejo municipal.

Art. 104. Los Jefes Políticos procederán a organizar las Juntas Parroquiales rurales dentro del mes de enero de cada año y cuidarán del funcionamiento de ellas.

Art. 105. Los Tenientes Políticos informarán mensualmente a los Jefes Políticos acerca del funcionamiento de dichas Juntas. Si el Teniente Político no cumpliera con ese deber el Jefe Político lo comunicará al Ministerio del Ramo, para la respectiva sanción.

Art. 106. Los Jefes Políticos no podrán poner el EJECUTESE, en los Presupuestos Municipales en que no se hagan constar, entre los Ingresos, todos los impuestos municipales que se cobren en cada parroquia rural, y entre los Egresos, el sesenta por ciento de los referidos impuestos invertidos exclusivamente en beneficio de la parroquia respectiva.

Art. 107. Al practicar los arqueos en las Tesorerías Municipales, los Jefes Políticos tendrán cuidado, bajo su más estricta responsabilidad, de examinar la recaudación e inversión de los fondos parroquiales.

Art. 108. La Contraloría, al examinar las cuentas presentadas por los Tesoreros Municipales, hará



efectivas las responsabilidades consiguientes, en contra tanto de los Tesoreros, como de los Concejales que hubiesen intervenido en la inversión distinta de los fondos de las citadas parroquias. Además podrá imponer una multa de hasta doscientos sucres a los Jefes Políticos negligentes en el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Capítulo.

Art. 109. Son atribuciones de la Junta Parroquial:

1º. Cuidar de la conservación de los caminos y vías fluviales de la sección;

2º. Promover la construcción de canales de riego y provisión de agua potable;

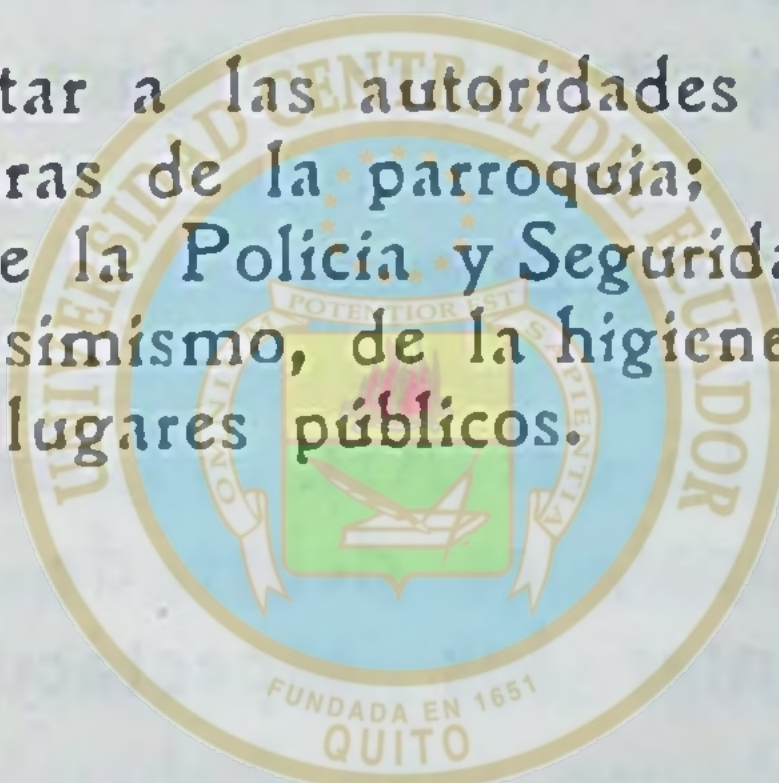
3º. Formar la estadística demográfica, agraria y comercial de la localidad;

4º. Vigilar e incrementar la instrucción primaria, y el cumplimiento por parte de los padres de familia, de la obligación de asistencia de los niños a las escuelas;

5º. Representar a las autoridades acerca de las necesidades y mejoras de la parroquia;

6º. Cuidar de la Policía y Seguridad;

7º. Cuidar, asimismo, de la higiene y salubridad de las viviendas y lugares públicos.



ÁREA HISTÓRICA  
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL



## CAPITULO QUINTO

### REGLAMENTO PARA LA PLAZA DE TOROS

El Concejo Municipal de Quito,

CONSIDERANDO:

Que según el N°. 15 del Art. 11 de la Ley de Régimen Municipal, es deber de las Municipalidades reglamentar los espectáculos públicos. (1)

DECRETA:

ÁREA HISTÓRICA

El siguiente Reglamento para la Plaza de Toros de esta ciudad.

## CAPITULO I

### OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

Art. 1º. La Empresa una vez obtenido el permiso respectivo, para llevar a efecto una corrida, está obligada a presentar al señor Comisario de Espectáculos, con la debida oportunidad, los correspondientes programas, para que con conocimiento de él y con su aprobación puedan ser repartidos al público. Estos conten-

---

(1) .....Corresponde al Art. 17, N°. 26 de la última Codificación.



drán el número de toros de lidia, la ganadería a que pertenecen, el nombre del personal de la cuadrilla, los precios de las localidades, y la hora en que comenzará el espectáculo. Caso de alteración del programa, ésta se hará con el consentimiento de la autoridad previo anuncio al público por medio de hojas volantes.

Art. 2º. La Empresa no podrá suspender una corrida sin causa justificada y con permiso de la autoridad, anunciándolo, por lo menos, con cuatro horas de anticipación, asimismo por medio de hojas volantes. Caso de que se la suspendiera por motivo de lluvia y aun no se hubiere lidiado ni un solo toro, tendrán derecho a la devolución del dinero los espectadores que así lo desearan y en caso contrario, las mismas entradas serán válidas para la corrida próxima.

Art. 3º. El Empresario no deberá poner a la venta mayor número de localidades que las que correspondan a la amplitud de la Plaza (3.000 más o menos). En caso que se comprobare esta irregularidad, será penado el Empresario con multa que le impondrá el Comisario.

Art. 4º. La Empresa está obligada a mantener la Plaza en perfecto estado de seguridad para el público, así como a tener corriente el piso del redondel para seguridad de los lidiadores. Deberá, tener además, el respectivo servicio de excusados y urinarios.

Art. 5º. El servicio de plaza que está obligado a tener el Empresario, será el siguiente: Una enfermería contigua al edificio de la Plaza, con su respectivo botiquín. Un Médico-Cirujano que atienda en caso de cualquier accidente en la lidia. Juego completo de banderillas, que constará por lo menos de veinte pares y cinco de fuego. El personal de boleteros, porteros y mozos de plaza (monos sabios). Servicio de cabestros para tirar a los toros que no se maten y mulillas para el arrastre de las reses muertas. El servicio de Policía necesario para



guardar el orden y una banda de música que amenice el espectáculo.

## CAPITULO II

### DE LA PRESIDENCIA

Art. 6º. La dirección de las corridas de toros corresponde al Comisario Municipal, quien está asesorado por el Técnico que él nombrare.

Art. 7º. Corresponde al Presidente:

1º. Marcar la duración de los periodos de lidia, por medio de toques de corneta.

2º. Ordenar el retiro del toro que durante la lidia se inutilizare, que saliere manso o que tuviere defectos que imposibiliten la lidia y no pueda ser jugado conforme al arte.

3º. Ordenar que se pongan banderillas de fuego al toro que lo necesite.

4º. Mandar al espada que se retire del lado del toro cuando transcurrido un tiempo prudencial, que no podrá exceder de quince minutos, no hubiere podido matar al toro.

Para efectuar esto se dará tres avisos al espada, por medio de un toque de corneta, mediando de uno a otro un tiempo de cinco minutos. El espada que, después de tocado el tercer aviso, siguiere pinchando al toro, será castigado por el Comisario con multa, sin perjuicio de la que de hecho se le impondrá por no haber podido matar al toro. Sólo con permiso del Presidente podrá estoquear al toro hasta que entre al corral.

5º. Ordenar que abandone el redondel el diestro que se halle herido, sin perjuicio de permitir que vuelva a la lidia cuando el Médico de la Plaza certifique que se encuentre en aptitud de seguir toreando.

6º. Ordenar que se retire de la plaza a cualquier individuo particular que salga al redondel con el propósito de torear o molestar a los lidiadores.



7º. Si repentinos aguaceros cayeran antes de empezar la corrida o ya comenzada, antes de banderillar el primer toro, ordenará suspender la corrida, poniéndose de acuerdo con el Jefe de la cuadrilla. En caso de que éste manifieste poder seguir la lidia por no estar en malas condiciones el piso de la plaza, ordenará continuar el espectáculo.

En el caso de banderillarse el primer toro, la corrida se dará por completa y terminada.

8º. No consentirá que salga al redondel un torero que no hubiere estado anunciado en el programa, si antes no se hubiere puesto en conocimiento del público.

9º. Castigará con multa o prisión al lidia-  
dor que no guardare el debido respeto con el público y se insolentare, ya de palabra o con ademanes groseros e impropios; así como al que no obedezca al toque de corneta que se de para cambiar los tercios.

10. Si estuviere anunciado en el programa una o más suertes, que, por no prestarse los toros, fuese de difícil ejecución, el Presidente podrá o no obligar a que se cumpla con el número del programa.

### CAPITULO III

#### DE LA LIDIA

Art. 8º. Las corridas de toros deberán darse, llenando estas condiciones:

1ª. La cuadrilla se compondrá de cinco toreros por lo menos: Un espada, un sobresaliente de espada y tres banderilleros o peones de brega, de los cuales uno será el puntillero.

2ª. El número de toros que se jueguen será de seis, debiendo tener la Empresa dos de reserva, para el evento de imposibilitarse alguno de los toros o salir manso. La infracción de esta disposición será penada con la multa de doscientos a quinientos sucres.



Art. 9º. Corresponde al espada la dirección de la cuadrilla y el cuidado de que la lidia se lleve a efecto según arte y que se ejecuten las suertes con el orden debido. Cuando sean dos los espadas, corresponde la dirección al espada más antiguo.

Art. 10. El Director y su cuadrilla se presentarán al Presidente diez minutos antes de comenzar la corrida.

Art. 11. La cuadrilla no podrá abandonar el redondel, bajo pretexto alguno, hasta que el Presidente de por terminado el espectáculo.

Art. 12. Caso de imposibilitarse el espada, por cogida u otro accidente, le corresponderá estoquear los toros anunciados en el programa, al sobresaliente de espada, y en caso de imposibilidad de éste, se terminará la corrida sin más toros de muerte.

Art. 13. El mismo orden de antigüedad guardarán los banderilleros en el segundo tercio, quedando prohibido el segundo banderillero adelantarse al primero y así sucesivamente. La infracción será castigada con multa de cinco a veinte sucres impuesta por el Presidente.

Art. 14. No podrán torear de capa ni el sobresaliente ni ninguno de los banderilleros, sin previo permiso del espada Director de la lidia.

Asimismo éste designará los turnos de brega y de banderillas de los peones, según el orden de su antigüedad.

Art. 15. La desobediencia del sobresaliente y de los banderilleros a cualquiera de las órdenes recibidas por el espada, será penada por la Presidencia con una multa prudencial.

Art. 16. Es prohibido al matador, descabellar un toro, sin haberle dado antes pase alguno de muleta. Cuando las condiciones de la res no permitan otra cosa, se podrá permitir esta clase de muerte.



## CAPITULO IV

## DISPOSICIONES VARIAS

Art. 17. Es facultativo a la Presidencia, permitir o no permitir a la Empresa para que pueda dar corridas bufas. En caso de autorizarse este espectáculo, se sujetarán éstas a las prescripciones de este Reglamento, en la parte que les corresponda; y además, llevarán las condiciones siguientes:

1º. El número de lidiado que actuará en la corrida, será, por lo menos, de tres.

2º. Se jugarán cuatro toros que no pasen de tres años de edad y que estén despuntados; y

3º. Se anunciarán al público por medio de carteles y en el respectivo programa, la clase de espectáculo que se va a presentar, para evitar reclamos posteriores.

Art. 18. Los toros que quedan vivos podrán ser despostados en el Matadero público, a juicio del veterinario, siempre que el desposte se haga al día siguiente de lidiados.

Art. 19. Se exonera del pago del impuesto de rastro por los toros que mueran en el redondel, así como no pagarán derechos de introducción de toros que vengan para lidia.

Art. 20. Las entradas de favor que deberá otorgar la Empresa para la corrida de toros, son las siguientes: Un palco de primera para la Municipalidad, con sus respectivas entradas; una entrada para el señor Jefe Político, una para el Técnico y una para cada uno de los periódicos de la localidad.

DADO en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal, en Quito, a trece de julio de mil novecientos veinte y dos. El Presidente, *Guillermo Pólit*.—El Secretario, *J. B. Castrillón*.



## CAPITULO SEXTO

REGLAMENTO DICTADO EN LA SESION DEL 28  
DE JUNIO DE 1933 PARA EL BALNEARIO  
MUNICIPAL DE GUAPULO

(G. M. N°. 66, pág. 55.—1933)

Art. 1°. El Balneario Municipal de Guápulo, queda sometido a la inspección del Departamento de Higiene Municipal.

Art. 2°. Se admitirán bañistas todos los días, desde las 6 a. m. hasta las 5. p. m. Antes y después de las horas indicadas queda prohibido el uso de la piscina.

Art. 3°. Cuando hubiere afluencia de bañistas, nadie podrá ocupar la piscina por más de media hora.

Art. 4°. Si se presumiere que una persona padece de alguna enfermedad contagiosa, no podrá hacer uso de la piscina sin presentar un certificado médico que acredite su restablecimiento o su salud. El Médico Municipal puede impedir el acceso al baño a cualquiera persona que tenga enfermedad contagiosa.

Art. 5°. Todos los que concurran al balneario están obligados a conducirse moral y decentemente. No se admitirán personas ebrias ni se permitirá en el balneario el uso de bebidas alcohólicas.

Art. 6°. Son obligaciones del cuidador del balneario: hacer cumplir estrictamente este Re-



glamento; asistir a él a las horas indicadas en el Art. 2º.; mantenerlo debidamente aseado y cuidar de la fuente llamada «La Chaca». No podrá ausentarse sin permiso de la respectiva autoridad.

Art. 7º. El Teniente Político sancionará las faltas de este Reglamento de acuerdo con las disposiciones del Código de Policía.

DADO en la Sala de Sesiones del Concejo, en Quito, a 28 de junio de 1933. El Presidente, *R. Jaramillo*.—El Secretario, *J. Roberto Páez*.



ÁREA HISTÓRICA  
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL



## CAPITULO SEPTIMO

### REGLAMENTO INTERNO PARA EL BALNEARIO DE EL TINGO

(G. M. N°. 50, pág. 123.---1932)

El Concejo Municipal de Quito,

DECRETA:

el siguiente Reglamento Interno para el Balneario Municipal de San Pedro del Tingo:

### CAPITULO I

DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

#### DEL BALNEARIO EN GENERAL

Art. 1. El Balneario de San Pedro del Tingo, funcionará como dependencia de la Dirección de Higiene Municipal, en lo referente a las recaudaciones.

Art. 2. El Balneario estará abierto para el público, desde las 6 a. m. hasta las 4 p. m.

### CAPITULO II

#### DEL MEDICO - ADMINISTRADOR

Art. 3. Corresponde al Médico - Administrador:

a) Cumplir y hacer cumplir estrictamente todos los reglamentos relacionados con el bal-



neario que haya dictado o en adelante dictare el Concejo;

b) Supervigilar y dirigir la estación termal en todo lo relacionado con la higiene y administración y verificar las recaudaciones;

c) Observar el estado de salud de las personas que concurran al balneario y señalar los baños destinados a aquellas que ofrezcan peligro de contagio. Para este fin el Médico-Administrador practicará el examen clínico de los bañistas que parezcan ofrecer peligro.

También vigilará el baño gratuito y prescribirá el que deba usar el bañista que ofrezca peligro de contagio. En este caso, si el enfermo fuera insolvente, el uso del baño prescrito será gratuito.

d) Dirigir la planta clorinizadora, bajo su responsabilidad;

e) Llevar estadísticas médicas del balneario y estadísticas de concurrencia al mismo.

f) Llevar un libro de ingresos, de conformidad con lo que disponga la Tesorería Municipal.

g) Presentar mensualmente al I. Concejo, por medio de la Dirección de Higiene Municipal, un informe detallado de sus labores en el balneario y del movimiento de este último, y hacer las sugerencias que crea conveniente para su mejora.

### CAPITULO III

#### DE LOS BAÑISTAS

Art. 4. Ninguna persona puede entrar a los balnearios, para conocerlo o para usar de los baños, sin previa presentación del boleto de entrada, adquirido según la tarifa que señale el Concejo. Exceptúase de esta disposición el baño gratuito en el que el ingreso es enteramente libre.

Art. 5. Cuando a juicio del Médico una persona presente peligro de contagio, se halla



obligada esta última a someterse al examen clínico que determina la letra c) del Art. 3 de este Reglamento.

Art. 6. Prohíbese terminantemente el uso de bebidas alcohólicas dentro del balneario, así como entrar en él en estado de embriaguez.

Art. 7. Toda persona que concurra al balneario se halla obligada a cumplir estrictamente con los Reglamentos dictados por el Concejo para el mismo.

Art. 8. Toda infracción de los Reglamentos del balneario será sancionada por las autoridades de Policía. El Médico-Administrador del balneario hará las denuncias del caso y solicitará el apoyo de las autoridades cuando fuere necesario.

#### CAPITULO IV

##### DISPOSICIONES GENERALES

Art. 9. Podrá el Concejo nombrar Administrador del balneario a persona que no tenga título de doctor en Medicina, y en este caso el certificado de salud que exhiba el bañista reemplazará al examen clínico de que habla la letra c) del Art. 3 de este Reglamento.

Art. 10. Al Administrador-Médico podrá exigir la presentación del certificado respectivo, para los efectos del Art. 5 del presente Reglamento.

Art. 11. El presente Reglamento regirá desde la fecha de su sanción.

DADA en la Sala de Sesiones del I. Concejo, en Quito, a quince de abril de mil novecientos treinta y dos. El Presidente del Concejo, *M. Angel Alvarez*.—El Secretario Municipal, *J. Roberto Páez*.

JEFATURA POLÍTICA DEL CANTÓN. Quito, a diez y ocho de abril de mil novecientos treinta y dos. EJECÚTESE. *Enrique Bustamante L.*—El Secretario, *J. A. Espinosa*.



## CAPITULO OCTAVO

### REGLAMENTO PARA DESBANQUES POR PARTICULARES EN LAS CALLES DE LA CIUDAD

Art. 1º. En determinados casos y mediante una orden por escrito suscrita por el Gerente de Obras Públicas, se permitirá a particulares el desbanque de ciertas calles de la ciudad, en las cuales el Municipio no realizara obras de urbanización inmediata.

Art. 2º. Concedido el permiso mencionado en el artículo anterior, el interesado podrá efectuar desbanques siempre que observe estrictamente los requisitos que se detallan a continuación.

Art. 3º. La excavación se llevará a cabo dentro de los límites de amplitud lateral y profundidad fijados sobre el terreno por la Dirección Técnica.

Art. 4º. Dicha excavación se la efectuará, además, en forma continua, de manera que la vía pueda ser utilizada con el tráfico al que deba destinársele, a medida que avance el trabajo del desbanque.

En ningún caso se tolerará la apertura de hoyos diseminados y que redunden en un peligro para el tránsito local.

Art. 5º. En caso de que la tierra excavada se destine a la fabricación de adobes, ladrillos o cualquier otro material de construcción, se permitirá que la sección excavada no sea



utilizada por el público, en toda su amplitud lateral, dentro de un plazo de diez a veinte días a juicio del Gerente de Obras, esto es, hasta que el interesado pueda retirar oportunamente el material que hubiere fabricado.

Art. 6º. Para que la vía quede expedita en la forma que se indica en el Art. 4º. es indispensable que el interesado desaloje fuera del lugar todo el material excavado que no pudiera utilizarlo.

Art. 7º. En ningún caso, ni aún a título de obra provisional, se hará tales obras, como desagües, cunetas, etc., etc., que entrañen peligros o sean una amenaza para las propiedades colindantes; si por otra parte hubiere necesidad indiscutible de realizar cualesquiera de dichas obras, éstas se las ejecutará mediante las normas que fijará en cada caso la Dirección Técnica.

Art. 8º. Toda infracción de este Reglamento traerá como consecuencia el retiro inmediato del permiso concedido para el trabajo del desbanque, sin perjuicio de obligársele al interesado a la regularización de la vía en la parte o partes excavadas, como también al pago de cualquier daño que hubiere ocasionado, a juicio del Gerente de Obras, quien se asesorará con el Director Técnico.

Art. 9º. Este Reglamento entrará en vigencia el 15 de mayo del año en curso.

APROBADO por el Concejo en sesión de 15 de mayo de 1934. LO CERTIFICO. El Secretario Municipal, *J. Roberto Páez*.



## CAPITULO NOVENO

### REGLAMENTO PARA LAS CASAS DEL BARRIO OBRERO

(G. M. N°. 81.—1935)



El Concejo Municipal,

DECRETA:

El siguiente Reglamento para el arrendamiento de las casas del Barrio Obrero:

Art. 1°. Las casas construidas y que en lo sucesivo se construyan por el Municipio para viviendas de obreros, serán concedidas en arrendamiento con opción al dominio, hasta cuando se dicte la Ley que faculte la venta de aquellas casas, sin los requisitos de la subasta.

Art. 2°. Serán distribuidas aquellas casas exclusivamente entre los obreros u obreras solicitantes que reunan las siguientes condiciones:

a). Que sea nacido y residente en Quito, o que haya residido por lo menos 10 años consecutivos con anterioridad al presente Reglamento;

b). Que no tenga propiedad raíz urbana ni rural en la República;

c). Que sea casado o jefe de familia.

d). Que se halle comprendido entre los 21 y 50 años de edad;



e). Que no tenga derecho a los beneficios que concede la Caja de Pensiones, y;

f). Que tenga antecedentes de buena conducta y constancia en el trabajo que le capacite para responder de las respectivas pensiones mensuales.

Art. 3°. Para verificar la distribución, se harán publicaciones por un término de ocho días, por lo menos, dando a conocer el número de casas, su precio, condiciones de pago y plazo dentro del cual deben presentarse las peticiones.

Art. 4°. El obrero que solicite una casa deberá presentar su pedimento acompañado de los documentos que certifiquen las condiciones requeridas por el Art. 2°. e indicando la clase de casa que le interesa por razón de su precio.

Art. 5°. La adjudicación de las casas se harán a los obreros que justifiquen los requisitos exigidos y por orden de presentación de los pedimentos, pero cuando el número de las solicitudes excedan al de casas disponibles, la adjudicación se hará por sorteo público, entre todos los capacitados que se hubieren presentado solicitando casas del mismo precio. En el sorteo intervendrá el Presidente y el Secretario del Concejo.

Art. 6°. La pensión de arrendamiento de una casa será igual a la cuota de amortización que corresponda pagar para la adquisición y calculada a base del 5<sup>0</sup>/<sub>0</sub> anual del precio de costo con más el interés del 3<sup>0</sup>/<sub>0</sub> también anual; por lo mismo, el valor de la pensión no podrá exceder del 8<sup>0</sup>/<sub>0</sub> del precio del inmueble.

Art. 7°. El precio de costo de una casa se fijará tomando en cuenta el valor de la construcción y el del terreno, sin consideración a la plus valía proveniente de las obras de urbanización.

Art. 8°. El adjudicatario de una casa comenzará a pagar las pensiones mensuales desde la fecha en que se le entregue el inmueble



previo el correspondiente contrato e inventario. El pago de las pensiones se hará por adelantado, permitiéndose una demora hasta de quince días de la fecha señalada para el pago.

Art. 9º. El abono de las pensiones mensuales podrá suspenderse hasta por tres meses y por una sola vez en cada año, únicamente por enfermedad grave del adjudicatario que deberá comprobarse ante el Presidente del Concejo. En este caso las pensiones atrasadas se abonarán por dividendos parciales e iguales en un período de seis meses a partir de la fecha en que haya cesado la enfermedad y conjuntamente con las pensiones que fueren deven-gándose.

Art. 10. La mora en el pago de las pensiones por un período de dos meses, que no sea motivada por la causal que se expresa en el artículo anterior, pondrá fin al contrato; y el Concejo recuperará el inmueble devolviendo únicamente lo que corresponda a la amortización ya que los intereses se compensarán con la ocupación del inmueble, salvo se entiende que existan peoras, cuyo valor se abonará con las cantidades correspondientes a la amortización del capital.

Art. 11. El concesionario de una casa no podrá hacer reformas ni modificaciones que alteren la construcción del edificio y tendrá la obligación de atender por su cuenta a las reparaciones que fueren necesarias para mantener la casa en el estado en que la reciba.

Art. 12. Tampoco podrá el concesionario alquilar o subarrendar el todo o parte de la casa; pues de hacerlo cesará el contrato y el Concejo recobrará el inmueble en la forma prevista en el Art. 10.

Art. 13. En caso de fallecimiento del concesionario podrán sus herederos continuar con el abono de las pensiones mensuales; pero si no quisieran o no pudieran efectuar tales pagos lo notificarán al Concejo para que éste



reciba el inmueble y haga las compensaciones establecidas en el Art. 9º.

Art. 14. El pago por los servicios de agua y luz correrán de cuenta de los concesionarios e independientemente de la pensión de que habla el Art. 6º.

Art. 15. El Concejo tendrá facultad para inspeccionar en cualquier tiempo, los inmuebles, concedidos en arrendamiento conforme a este Reglamento con el fin de cuidar de su buena conservación y exigir de los poseedores que hagan las reparaciones a que se hallan obligados.

Art. 16. Los concesionarios de casas deberán asegurar el pago de las doce primeras mensualidades constituyendo como fiador de una persona honorable y solvente o depositar en la Tesorería Municipal.

Art. 17. En los contratos que se otorguen para las concesiones de las casas se cuidarán de incluir todas las cláusulas que sean necesarias para el cumplimiento de las obligaciones que se imponen por este Reglamento.

Art. 18. Las disposiciones de este Reglamento y por lo mismo los contratos que se celebren de acuerdo con él tienen el carácter de provisionales hasta tanto se dicte la Ley que faculte la venta de casas baratas para obreros. Sancionada esta Ley el Reglamento y contratos se modificarán de acuerdo con lo que disponga la Ley.

Comprobada la falsedad de obrero se dará fin al arriendo.



## LIBRO DECIMO CUARTO

### Educación Pública

Antecedentes Legales.—Ordenanza que establece en Quito la Escuela Municipal de Industrias para mujeres.—Ordenanza por la que se acepta la donación que de su casa de la calle Rocafuerte hace el Capitán de Navío don Francisco Fernández Madrid.—Ordenanza que refunde en una sola las Escuelas «24 de Mayo» y de Industrias para mujeres, con el nombre de Liceo «Fernández Madrid».—Ordenanza que crea tres becas en el Liceo para tres alumnas de Guayaquil.—Prospecto del Liceo.—Becas en el Liceo según el Presupuesto Municipal.



## CAPITULO PRIMERO

### ANTECEDENTES LEGALES

(Decreto Legislativo de 21 de octubre de 1912 relacionado con el mejoramiento moral y económico de la clase obrera y Reformatorio de la Ley Orgánica de Instrucción Pública).

El Congreso de la República del Ecuador,

DECRETA:

Art. 24. Después del Capítulo X del Título II póngase el siguiente:

### CAPITULO .....

#### DE LA INSTRUCCION DE LA CLASE OBRERA

Art. ... Las Municipalidades emplearán dos unidades de las diez a que se refiere el Art. 105, en los siguientes objetos relativos a la instrucción de la clase obrera: (1)

Promulgado el 12 de noviembre de 1912. R. O. No. 59. Anuario de Legislación: 1912, pág. 148

---

(1) La disposición en referencia, dice: «Art. 105. Los Municipios están obligados a invertir, por lo menos, el 10<sup>o</sup>/o de sus rentas en el sostenimiento de la instrucción primaria. Podrán hacer esta inversión, ya sea directamente o entregando la cuota centesimal a los Colectores de Instrucción primaria».



a) En fomentar la organización gremial voluntaria de hombres o mujeres que ejerzan oficios o artes mecánicas;

b) En establecer escuela de adultos para la instrucción primaria de obreros que no la hubieren recibido en la niñez;

c) En dar lecciones de higiene y moral en el seno de los gremios;

d) En la propagación y enseñanza de métodos y procedimientos para perfeccionar los oficios y artes mecánicas;

e) En el sostenimiento de becados, dentro o fuera de la República, para el aprendizaje de aquellos procedimientos o métodos.

Art. ... Las Municipalidades expedirán los Reglamentos que fueren necesarios para esta enseñanza y llevarán una cuenta especial con el nombre de «INSTRUCCION DE LA CLASE OBRERA».

Art. ... No podrán ser empleados con renta de estos fondos sino obreros que hubiesen ejercido, habitual y públicamente y con buen crédito, un oficio o arte mecánico durante un año, por lo menos, en una cabecera de cantón.

Podrán ser becados con los mismos fondos los obreros comprendidos en la disposición anterior o los hijos de ellos, de 15 a 25 años de edad.

Art. ... Una vez terminado su aprendizaje, los becados estarán obligados a ejercer por tres años continuos, en el territorio del cantón que concedió la beca, el oficio o arte que hubieren aprendido; y además a enseñarlos en los términos convenidos con las respectivas Municipalidades.

Art. ... Acrecerán los fondos municipales de que se trata en este Capítulo las cantidades y valores que para esta enseñanza destinaren los Poderes públicos o donaren Corporaciones o particulares por acto entre vivos o por testamento.



## LEY DE REGIMEN MUNICIPAL

Art. 17, N°. 4. (Atribuciones del Concejo Municipal). Fomentar la educación pública en la forma y por los medios previstos en la Ley Orgánica del Ramo, y, especialmente, sostener becados en los Institutos Normales y en las escuelas profesionales, y crear bibliotecas.

El Concejo, por sí solo, o con cooperación del Estado, tendrá la facultad de construir edificios escolares, sea permitiendo la construcción de escuelas en sitios de propiedad municipal, sea contribuyendo con fondos para dichas obras.



ÁREA HISTÓRICA  
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL



## CAPITULO SEGUNDO

### ORDENANZA QUE ESTABLECE EN QUITO LA ESCUELA MUNICIPAL DE INDUSTRIAS PARA MUJERES

(Gaceta Municipal N°. 11, pág. 207, 1926.)

El Concejo Municipal de Quito,

Visto el Decreto de la Junta de Gobierno Provisional de 13 de agosto de 1925, que ordena el establecimiento de Escuela de Industrias en los cantones de la República, a cargo de las respectivas Municipalidades;

#### DECRETA:

Art. 1°. Establécese en Quito la Escuela Municipal de Industrias y Oficios para mujeres, bajo la inmediata vigilancia e inspección del Concejo Municipal.

Art. 2°. Los fondos para el funcionamiento de esta Escuela, serán determinados en el Presupuesto que expida el Concejo Municipal para el ejercicio financiero de cada año económico.

Art. 3°. El funcionamiento de la mencionada Escuela, será debidamente organizado por el Concejo, mediante un Reglamento especial que será discutido y aprobado en una sola sesión.



DADA en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal, en Quito, a 1º. de marzo de 1926. Por el Presidente, el Vicepresidente Encargado del Despacho, *C. Mantilla*.—El Secretario Municipal, *J. Roberto Páez*.

JEFATURA POLÍTICA DEL CANTÓN. EJECÚTESE. *Enrique Bustamante L.* El Secretario, *J. A. Espínosa*.



ÁREA HISTÓRICA  
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL



## CAPITULO TERCERO

ORDENANZA MUNICIPAL EN QUE SE ACEPTA LA  
DONACION QUE HACE AL CONCEJO EL DISTINGUI-  
DO PATRIOTA QUITAÑO SEÑOR CAPITAN DE  
NAVIO DON FRANCISCO FERNANDEZ MADRID  
Y BELLO DE SU CASA DE LA CALLE ROCAFUERTE,  
PARA LOS OBJETOS QUE SE DETERMINAN

(G. M. N°. 14 de 1927, pág. 280)

El Concejo Municipal de Quito,

**ACONSIDERANDO:**  
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

Que el señor Capitán de Navío, don Francisco Fernández Madrid y Bello, distinguido patriota quiteño, ha hecho donación en vida de su casa de la calle Rocafuerte, para que parte de su valor lo destine el Municipio de esta Capital a la erección de un Monumento al Libertador Simón Bolívar, y, otra parte, para socorrer a las familias pobres del lugar;

Que este acto de filantropía es prueba incontestable del ascendrado patriotismo del donante, de su celo por la gloria de Bolívar, de su amor al pueblo quiteño;

Que es deber de las Autoridades Públicas agradecer a sus buenos hijos los actos de excepcional mérito como el presente y estimular a los demás para que resurjan los sentimientos cívicos y las grandes y nobles acciones;



## ACUERDA:

Aceptar la donación que hace para los objetos indicados;

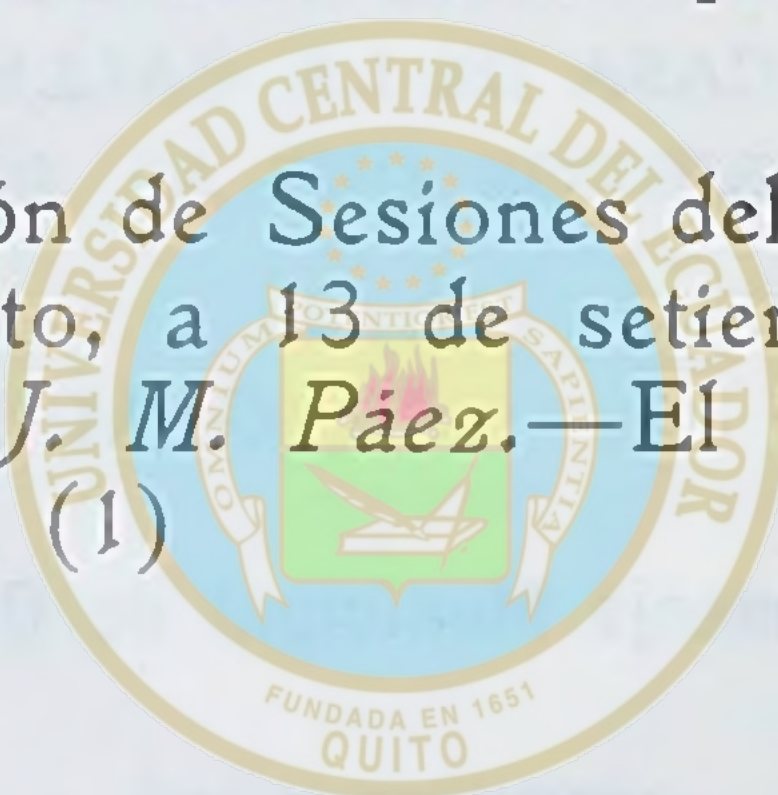
Agradecer, como agradece, a nombre del pueblo de Quito, al filántropo señor Madrid, por su meritísimo acto de desprendimiento y generosidad;

Recomendarlo a la gratitud de la ciudad de Quito;

Mandar trabajar su retrato en su carácter de Capitán de Navío, para que sea colocado en los salones del Concejo entre los hijos distinguidos de la Capital; y,

Publicar este acuerdo en la Gaceta Municipal, e insinuar su publicidad en los periódicos de la localidad.

DADO en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, en Quito, a 13 de setiembre de 1926. El Presidente, *J. M. Páez*.—El Secretario, *J. Roberto Páez*. (1)



ÁREA HISTÓRICA  
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

---

(1) El Decreto de la Junta de Gobierno Provisional que exonera del pago de los impuestos que afectan a las donaciones, a la casa del filántropo señor Madrid; y, el Decreto que facultó al Municipio la venta de la casa, se hallan publicados en la Gaceta Municipal, Nos. 15 de 1927 (pág. 324), y 23 de 1928 (pág. 573), respectivamente.



## CAPITULO CUARTO

ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE REFUNDE  
EN UNA SOLA LAS ESCUELAS «24 DE MAYO» Y  
DE INDUSTRIAS Y OFICIOS PARA MUJERES, CON  
EL NOMBRE DE «LICEO MUNICIPAL  
FERNANDEZ MADRID»

(G. M. N°. 32 de 1930, pág. 64)

El Concejo Municipal de Quito,

DECRETA:

Art. 1°. Las Escuelas Municipales «24 de Mayo» y de Industrias y Oficios para mujeres, quedan refundidas en una sola que se denominará «LICEO MUNICIPAL FERNANDEZ MADRID».

2°. El Liceo tendrá dos secciones: Instrucción Primaria general y la especial de Artes y Oficios.

Art. 3°. El Liceo estará regido por una Directora común para las dos secciones mencionadas en el artículo anterior; pero cada una éstas tendrá una Preceptora-Jefe para la organización técnica de la educación, sujeta a la autoridad de la Directora. Además el Liceo contará con una Subdirectora-Profesora y el número de Profesoras que el Concejo determinare, de acuerdo con los Presupuestos.

Art. 4°. El Liceo no dará enseñanza elemental, comprendida en los grados primero,



segundo y tercero, siendo por lo tanto exigencia para el ingreso de las alumnas el que hubieren cursado dichos grados en otros establecimientos de enseñanza.

Art. 5º. Quedan suprimidas las Direcciones de las Escuelas «24 de Mayo» y de Industrias y Oficios para mujeres, que funcionan actualmente.

Art. 6º. Para el sostenimiento del Personal docente del Liceo se tomará de las partidas que señala el Presupuesto vigente, en la Sección de Instrucción Pública, letra n), Nos. 3 y 4 del Art. 10 y para el sostenimiento y ampliación del mismo Liceo, señalase la cantidad de DIEZ MIL SUCRES ANUALES, la misma que el Concejo ha botado en sus Presupuestos, para arrendamientos de locales escolares, etc.

Art. 7º. Antes del 30 de octubre del año en curso, la Comisión de Instrucción Pública del Concejo, presentará el Reglamento que debe regir en el «Liceo Fernández Madrid», para su aprobación. El Liceo se abrirá el 1º de octubre. De la misma manera también presentará el plan gradual de los estudios para la obtención de los respectivos Diplomas, de acuerdo con las Leyes Orgánicas de Instrucción Pública y las aspiraciones del Concejo.

Art. 8º. El Personal docente de las Escuelas «24 de Mayo» y de Artes e Industrias para mujeres, seguirá gozando sus haberes hasta el 30 de setiembre, pudiendo el Concejo antes de esta fecha nombrar el nuevo personal, el mismo que gozará de su sueldo desde el 1º de octubre, aunque prestare sus servicios con anterioridad a esta fecha.

Art. 9º. El servicio de higiene escolar tendrá su despacho en el local en que funciona el «Liceo Fernández Madrid» y su personal estará sujeto al Reglamento Interno de dicho Liceo.

Art. 10. Las especies que sean manufacturadas por las alumnas del «Liceo Fernández Madrid» y que fueren vendidas por cuenta del



Concejo, ingresarán en sus valores a la Tesorería Municipal e incrementarán la partida de EXTRAORDINARIOS E IMPREVISTOS del Presupuesto, y se invertirán en Instrucción Pública.

Art. 11. Las alumnas del Liceo «Fernández Madrid», que rindieran exámenes en el Plantel para obtener títulos de Maestras, no pagarán derechos de exámenes.

Art. 12. La presente Ordenanza regirá desde el 1º de octubre.

DADA en la Sala de Sesiones del I. Concejo, en Quito, a 17 de setiembre de 1930. El Presidente, *Carlos Freile Larrea*. El Secretario, *J. Roberto Páez*.

JEFATURA POLÍTICA DEL CANTÓN. Quito, a 22 de setiembre de 1930. EJECÚTESE. *Enrique Bustamante L.* Por el Secretario, *José María Proaño*, Oficial Mayor.



ÁREA HISTÓRICA  
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL



## CAPITULO QUINTO

### ORDENANZA MUNICIPAL QUE CREA TRES BECAS EN EL «LICEO FERNANDEZ MADRID» PARA TRES ALUMNAS DE GUAYAQUIL

(G. M. N°. 46 - 47 de 1931.—  
Pag. 201).

El Concejo Municipal de Quito,

#### CONSIDERANDO:

Que es deber de los Concejos formar la educación popular por los medios a su alcance;

Que la concesión de becas a las personas que necesitan el apoyo municipal es medio eficaz para conseguir este objeto;

Que las Fiestas Patrias deben conmemorarse empleando el dinero destinado para ellas en bien de las clases desheredadas de la sociedad;

#### DECRETA:

Art. 1°. Créanse tres becas en el «Liceo Municipal Fernández Madrid», las mismas que dará anualmente el Concejo de Quito a las personas de sexo femenino que designe el I. Ayuntamiento de Guayaquil y que reúnan los requisitos puntualizados en esta Ordenanza.



Art. 2º. Son requisitos para obtener estas becas, que tendrán la asignación de 30 sucres mensuales:

a) Haber terminado la instrucción primaria y carecer de recursos para atender a la educación profesional;

b) Gozar de buena salud;

c) Ser de conducta intachable; y

d) Tener no menos de catorce ni más de veinte años de edad.

Art. 3º. El Concejo Municipal de Quito al formular su presupuesto anual, destinará la cantidad necesaria para el pago de estas becas.

Art. 4º. Por esta vez y hasta completar la suma de 1.500 sucres, las pensiones de las becadas y los gastos que hubieren de hacerse para el cumplimiento de esta Ordenanza, se tomarán de la partida de FIESTAS PATRIAS, Art. 11, letra m), N°. 2 del Presupuesto Municipal vigente.

Art. 5º. La presente Ordenanza regirá desde la fecha de su sanción.

DADA en la Sala de Sesiones del I. Concejo Municipal, en Quito, a 5 de noviembre de 1931. El Presidente del Concejo, *Carlos Freile Larrea*. El Secretario Municipal, *J. Roberto Páez*.

JEFATURA POLÍTICA DEL CANTÓN. Quito, a 11 de noviembre de 1931. EJECÚTESE. *Enrique Bustamante L.* El Secretario, *J. A. Espinosa*.



## CAPITULO SEXTO

### PROSPECTO DEL LICEO FERNANDEZ MADRID

#### SECCIONES EN QUE SE DIVIDE EL LICEO MUNICIPAL

El Liceo comprende dos secciones: la Comercial y la de Artes y Oficios.

La primera tiene por objeto formar oficinistas y contadoras.

La segunda formar obreras y sobre todo madres de familia aptas para desempeñar los complejos deberes del hogar.

ÁREA HISTÓRICA  
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL  
CONDICIONES DE ADMISION

Para ingresar a cualquiera de las dos secciones se deben llenar los requisitos siguientes:

1º. Solicitar la matrícula al Concejo Municipal.

2º. A la solicitud deben añadirse estos documentos: partida de nacimiento; certificado de salud; dos certificados de buena conducta; certificado de la Directora en cuya escuela haya terminado la solicitante los estudios correspondientes a la enseñanza primaria.

3º. Las alumnas que deseen ingresar al Liceo deben rendir un examen referente a las materias de sexto grado; este examen sirve para comprobar que la alumna ha terminado la enseñanza primaria; y también para seleccionar de este modo a las alumnas que merezcan ocu-



par las vacantes que en el Liceo se producen anualmente.

#### MATERIAS DE ESTUDIO OBLIGATORIAS

Todas las alumnas de la Sección de Artes y Oficios están obligadas, a más de la materia manual que escogieren, al aprendizaje de las siguientes asignaturas:

Redacción, Aritmética, Puericultura, Economía doméstica, Arte culinario, lavado y planchado, corte de ropa interior.

#### TIEMPO DE DURACION DE LOS ESTUDIOS

Para obtener el título de Profesoras de cualquiera de las profesiones que en el Liceo se enseñan, precisa estudiar con éxito tres años.

Para ingresar a la clase de corte y confección es obligatorio que la alumna haga un estudio preliminar de labores de mano, en una de las secciones dedicadas a este fin. Sólo habiendo terminado satisfactoriamente un año de aprendizaje de esta asignatura, podrá matricularse en la Sección de Corte y Confección.

#### ÁREA HISTÓRICA

#### OBLIGACIONES GENERALES DE LAS ALUMNAS

Al matricularse en el Liceo la alumna queda obligada a proveerse inmediatamente de las siguientes prendas:

Dos delantales o guarda polvos de trabajo.

Un uniforme azul marino de tela nacional para diario.

Un uniforme blanco, de tela nacional para desfiles y fiestas escolares.

Una boína para diario.

Un sombrero de paja toquilla.

#### OBSERVACIONES

La enseñanza es enteramente gratuita.

El I. Concejo provee a la alumna de todo el material de trabajo que necesite.

Después de la exposición anual se venden las obras confeccionadas por las alumnas; el



Concejo cobra el valor del material, valor que ingresa a la Tesorería Municipal para formar la Caja del Liceo, toda la ganancia es para las alumnas respectivas.

El Liceo prohíbe toda cuota que no tenga la finalidad de auxiliar a niñas huérfanas y muy pobres.

El Liceo no reconoce en las alumnas más jerarquía que su aplicación, honorabilidad y empeño de ser mejores por su valor moral. La posición social o riquezas de los padres de las alumnas no aumenta la importancia a la alumna dentro del Plantel.

#### INTERNADO

Las alumnas que no tuvieran familia en la Capital, podrán ser aceptadas en el Internado del Liceo, para lo cual llenarán estos requisitos:

Deben abonar mensualmente la cantidad de treinta y cinco sucres (valor que deben pagar a la Habilitada al comienzo del mes).

Su equipaje se compone de:

2 sobrecamas blancas.

4 sábanas.

1 almohada.

3 fundas de almohada

2 frazadas de lana.

2 bolsas para ropa.

3 toallas.

1 cepillo de zapatos.

1 cepillo de ropa.

1 cepillo de dientes.

1 tubo de pasta para dientes.

1 jabón.

1 vaso.

Las semi-internas abonarán cincuenta centavos por cada almuerzo.

APROBADO.—El Presidente del Concejo, *M. Angel Alvarez*.—El Secretario, *J. Roberto Páez*.

Quito, Noviembre de 1932.



## CAPITULO SEPTIMO

### ORDENANZA DE PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL AÑO DE 1936.

El Concejo Municipal de Quito,

la siguiente Ordenanza de Presupuesto ordinario para el año de 1936.

### PARTE SEGUNDA

DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

#### CAPITULO IV

Art. 14. Concesiones y Subvenciones.

##### Sección 2ª.

##### BECAS

Nº. 343. Para dos becas en la Escuela de Artes y Oficios de esta ciudad, a S/. 30,00 c/u. .... S/. 720,00.

Nº. 344. Para tres becas en la Escuela de Agricultura y Veterinaria, a S/. 100,00 c/u. .... S/. 3.600,00.

Estas cantidades se entregarán a los Oficiales Pagadores de la Escuela de Artes y Oficios y de la Universidad Central.



Las becas de la Escuela de Artes y Oficios las concederá el Concejo, de preferencia a personas de parroquias rurales.

Nº. 345. Para una beca en la Escuela de Bellas Artes de esta ciudad, para la clase obrera, en diez meses...S/. 150,00.

Nº. 346. Para el sostenimiento de tres becas en el Liceo Fernández Madrid, según Ordenanza de 11 de noviembre de 1931, a S/. 30,00 mensuales, c/u..... S/. 1.080,00



ÁREA HISTÓRICA  
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL



## LIBRO DECIMO QUINTO

### Jurisprudencia varia del Concejo

En un caso de indemnización por accidente de trabajo.—Informe sobre si la Ley de Desahucio de Trabajo, de 6 de octubre de 1928, puede aplicarse a los empleados municipales.—Jurisprudencia sobre pagos de honorarios, a peritos quienes gozan de sueldo.



### CAPÍTULO PRIMERO

ÁREA HISTÓRICA  
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

#### UN CASO DE INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO

Informe del señor Procurador Síndico Municipal, aprobado por el Concejo en sesión de 22 de febrero de 1933.

Nº. 11.—Sindicatura Municipal.—Quito,  
a 11 de enero de 1933.

Señor Presidente del I. Concejo Municipal.

El señor N. N., a nombre de su hermano X. X., expuso lo siguiente, en una solicitud, cuya fecha de presentación en la Procuraduría, es de 8 de diciembre del año pasado.

Que el señor X. X. en el viaje que hizo para inspeccionar los trabajos municipales del



balneario del Tingo sufrió un accidente de trabajo con riesgo inminente de su vida, el día doce de noviembre próximo pasado;

Que de acuerdo con determinantes disposiciones de la Ley sobre responsabilidades por accidentes de trabajo, reclamaba para su hermano la indemnización de las planillas adjuntas a la solicitud;

Estas planillas son:

1º. Por el automóvil que ocupó el Médico doctor don Alejandro Luna para ir a Conocoto y a San Pedro del Tingo y atender al señor X. X. S/. 30,00

2º. Honorario del doctor Luna y medicamentos empleados por dicho doctor ..... » 50,00

3º. Permanencia del enfermo en la Clínica Villavicencio-Arellano y honorario de la persona acompañante ..... » 72,00

Total ..... S/. 152,00

Este era el reclamo hasta el ocho de diciembre, en que entró la solicitud del señor N. N., al estudio de la Procuraduría. Ayer once de enero, el señor Secretario del Concejo me entregó un certificado de los señores Ricardo Villavicencio Ponce y Alejandro Luna. En este se dice: «El señor X. X. fue víctima de un accidente con motivo de una caída del caballo, hace pocas semanas, y los médicos suscritos le prestamos servicios profesionales. Se le produjo una conmoción cerebral, un derrame de sangre en un ojo y parálisis del párpado. Todo esto causó serio detrimento en su estado general. Pocos días después, le sobrevino una infección septicémica que le causó la muerte, lo que no habría sucedido sin la fatal caída del caballo».

¿Qué objeto tiene este nuevo certificado? Tal vez fortificar simplemente la solicitud del mes de diciembre? ¿Tal vez preparar una nueva solicitud por indemnización de accidentes de



trabajo en caso de muerte? Voy a procurar estudiar ambas hipótesis con la posible claridad. En el actual estado económico del Municipio la cuestión tiene notable importancia.

LAS LEYES DE 1928. El 6 de octubre de 1928 se expidieron seis leyes sobre el trabajo: a) Sobre contrato individual de trabajo; b) sobre duración máxima de la jornada de trabajo y descanso dominical; c) sobre trabajo de mujeres y menores y protección a la maternidad; d) sobre desahucio del trabajo; e) sobre accidentes del trabajo; f) sobre procedimiento para las acciones emanadas de las leyes de trabajo. En mi informe N°. 24 de 27 de febrero de 1930, y sobre todo, en el N°. 17 de 8 de febrero del mismo año, traté de demostrar que estas leyes, no se aplican a los empleados y funcionarios públicos. Me remito a mis dos informes citados, aprobados por el I. Concejo. Algunas de las citadas leyes, por ejemplo, la relativa al Desahucio del Trabajo, al aplicarse a los empleados y funcionarios públicos, produciría trastornos gravísimos en la administración. Precisé algunos casos en mi informe de ocho de febrero de 1930. El Concejo resta su confianza a un empleado municipal y cancela su nombramiento por motivo de interés público: el empleado reclamará la indemnización prevista en la Ley de Desahucio del Trabajo. El Municipio por motivos de economía pública, por falta de rentas, suprime una dependencia municipal o elimina tales o cuales cargos: los empleados agraviados reclamarán la indemnización prevista por la Ley. He aquí las consecuencias prácticas. Por esto, en todas partes hay leyes especiales para regular la suerte de los empleados y funcionarios públicos. Pero, aún prescindiendo de estas consecuencias prácticas, que no constituirían un argumento fundamental, es evidente que las leyes de 1928 se refieren a los patrones y obreros o a empleados entre los cuales median relaciones de De-



recho Privado, de Derecho Civil; discusión en cuanto a salario, discusión en cuanto a las condiciones de trabajo; abusos para expulsar a empleados y obreros, etc., etc. Estas leyes de 1928 no se aplican a las relaciones especialísimas que median entre una entidad de Derecho Público y sus empleados de carácter igualmente público. Las Instituciones de Derecho Público determinan en el Presupuesto los sueldos de los empleados, y en la Ley y los Reglamentos están determinadas las obligaciones y derechos de los empleados. Los candidatos o no aceptan el sueldo y las obligaciones. Si lo aceptan, admiten el nombramiento y se poseionan del cargo. Si no lo aceptan rechazan el nombramiento o renuncian el cargo. Tan sólo para fortificar mi parecer, copiaré unas palabras del Profesor Posada ya citadas en mi informe de 1930. «La relación del empleo es una relación jurídica *sui-générís*; en la forma no se trata sino de contratos civiles, ya que la relación de empleo es una función, una relación jurídico-político; en general no se admite que la relación de empleo suponga el posible acuerdo contractual de dos voluntades; el empleo es una función que el Estado organiza y cuyo desempeño acepta el empleado, sometiéndose a las condiciones que el Estado imponga». He aquí el parecer de un eminente jurista español.

Tan sólo los carpinteros, sastres, peones, albañiles, etc., etc., que pueden contratar con el Municipio una obra cualquiera que cae bajo la regulación del Derecho Civil, ya que el Municipio efectúa en ciertas esferas actos de Derecho Civil como cualquier otro particular, tan sólo esos obreros pueden ampararse con las leyes de 1928. Los empleados públicos, remunerados en el Presupuesto, no pueden ampararse por esas leyes. Por consiguiente, si sólo existiera la Ley de 1928 sobre Accidentes de Trabajo, el señor X. X. no tendrá derecho para su reclamo.



*Art. 17 del Presupuesto Municipal:* Pero existe, entre las Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal, el Art. 17 que dice: «También se pagarán de la partida de EXTRAORDINARIOS E IMPREVISTOS a los obreros y empleados al servicio del Municipio que fueren víctimas de accidentes de trabajo en la proporción y cantidad prescrita en la Ley de 6 de octubre de 1928». La existencia de este artículo nos obliga a tres cosas: a) A desentrañar su sentido; b) a apreciar su legalidad; c) a considerar la situación del señor X. X. frente a la disposición presupuestaria en caso de que ella fuere legal.

a) Sentido del artículo dice que se pagará de la partida de EXTRAORDINARIOS a los obreros y empleados al servicio del Municipio. La palabra empleados, usada en este artículo, seguramente no tiene el mismo alcance que la palabra obreros, que a veces usan las leyes de 1928 para hablar de los obreros de las fábricas, talleres, establecimientos industriales, etc., etc. Obreros y empleados al servicio del Municipio, comprende, sin duda, todo el personal municipal: los obreros propiamente dichos y los que se dedican al servicio del Municipio, cuya remuneración consta del Presupuesto.

*Obreros y empleados al servicio del Municipio:* expresión amplia. Si la Ley no distingue el intérprete no puede distinguir. No cabe decir que empleados al servicio del Municipio son los mismos obreros, porque el intérprete no puede suponer en el Legislador ripio ni redundancias. Hay que partir de la base, hasta evidente prueba en contrario, de que el Legislador pesa cada palabra como un diamante. La conclusión sería ésta: El Concejo Municipal de Quito, por su cuenta y riesgo, ha extendido los beneficios de la Ley de Accidentes de Trabajo que, de suyo sólo se aplican a los obreros y empleados particulares, en beneficio también de los empleados públicos municipales. Las otras leyes de



trabajo no se aplican a los empleados públicos municipales; porque ninguna Ordenanza especial ha extendido el beneficio de esas leyes a los empleados públicos municipales.

b) *Legalidad del Art. 37 del Presupuesto Municipal.* Pudiera objetarse: si la Ley de Accidentes del Trabajo sólo favorece a los obreros y empleados de persona e instituciones de Derecho Privado, el Concejo no puede extenderla a los empleados públicos municipales, porque esto sería contrariar la Ley.

La objeción no parece definitiva. La Ley de Accidentes del Trabajo se limita a proteger a los obreros y empleados particulares; pero en ningún momento prohíbe el que el Concejo Municipal provea una Ordenanza, un Reglamento, una disposición para amparar contra los accidentes de trabajo aún a los empleados públicos. El Municipio no puede ir en contra ni de la Constitución ni de la Ley. Pero puede crear instituciones sociales, de asistencia, de higiene aún cuando el Estado no las haya creado. Las Municipalidades son autónomas en el ejercicio de sus funciones e independientes de los otros poderes públicos, dentro de la Constitución y de las Leyes del Estado, dice el Art. 141 de la Constitución de la República. ¿Por qué el Municipio no podría expedir una Ordenanza sobre accidentes de trabajo para los empleados públicos? ¿Por qué no ha de poder en una disposición del presupuesto hacer extensiva a los empleados públicos la Ley de Accidentes del Trabajo? El Art. 37 del Presupuesto Municipal me parece válido. Además dentro del Derecho Positivo, el Presupuesto está vigente mediante todas las solemnidades externas para su vigencia. El Jefe Político lo ha sancionado, sin objetarlo. Por consiguiente, esta es una nueva razón más, para la aplicabilidad del Art. 37 del Presupuesto Municipal.

c) *Situación del señor X. X.* El señor X. X. fue Inspector Municipal. Su cargo está pre-



visto en la partida 86 de la Sección V del Art. 10 del Presupuesto. Ganaba ciento setenta sucres al mes. Creo que tiene derecho a que se le pague la cuenta costada al principiar este informe. Si se tratare de una indemnización por la muerte, el caso sería grave para la hacienda municipal; porque, según el Art. 11 de la Ley de Accidentes del Trabajo, la familia del señor X. X. tendría derecho a percibir como indemnización los gastos del entierro, no excediendo éstos de cien sucres, y además una cantidad igual al salario de tres años. A fin de que mi parecer, en nada cree un precedente gravoso para la hacienda municipal, he solicitado que este informe se lo conozca en sesión secreta.

Como el Concejo no ha dado vigencia en su cantón en favor de los empleados públicos sino a la Ley de Accidentes de Trabajo para determinar la proporción y cantidad de las indemnizaciones, me parece que, si el señor N. N. quisiera intentar una acción judicial contra el Concejo, debería acudir a las leyes generales del procedimiento civil, y no a la ley especial de procedimiento para las acciones provenientes del trabajo, ley que da acción particular a los empleados privados, y que el Concejo no la ha incorporado en ninguna de sus Ordenanzas en favor de los empleados públicos municipales. El Concejo sólo ha creado el derecho de los empleados públicos municipales a la indemnización.

En todo caso, pongo a salvo el más acertado parecer del I. Concejo Municipal.

*J. M. Velasco Ibarra.*



ANEXO AL INFORME N<sup>o</sup>. 11.

Sindicatura Municipal del Cantón.—Quito, a 14 de enero de 1933.

Señor Presidente del I. Concejo Municipal.

Se me ha pedido que aclare un punto de mi informe N<sup>o</sup>. 11 relativo a la aplicación de las leyes del trabajo de 1928 a los empleados públicos municipales. Voy a hacerlo con toda satisfacción y en cumplimiento de mi deber.

I. La conclusión a que llegué en mi informe N<sup>o</sup>. 11 es la siguiente: al señor X. X. se le deben indemnizaciones por el accidente de trabajo, de que fue víctima, en virtud del Presupuesto Municipal (Art. 37), y no en virtud de la Ley sobre Accidentes de Trabajo de 1928.

II. La Ley sobre Accidentes del Trabajo, por sí misma, no protege a los empleados públicos municipales, sino tan sólo a los obreros y operarios que trabajan en las obras e industrias municipales como podrían trabajar en una obra o industria particular. En el informe respectivo que elevé al Concejo en 1930 hice notar que el Estado y el Municipio tienen dos formas principales de actividad: la una en cuanto actúan como entidades de Derecho Público, como autoridades con fines especialísimos y y privativos, que sólo al Estado y al Municipio le competen. La otra forma cuando el Estado y el Municipio actúan en esferas análogas o idénticas a las de personas particulares. Por ejemplo, cuando el Estado o el Municipio contratan la construcción de una casa con carpinteros y albañiles, o en el ensanche de un camino con peones y capataces, actúan en relaciones idénticas a las de los particulares que contratan la construcción de una casa o la reparación de un camino particular. En este caso —el de las relaciones económico - industriales— el Estado y el Municipio son tan patronos como los particulares que emplean operarios y



la Ley de Accidentes del Trabajo se aplica a favor de los operarios del Estado y del Municipio. El Municipio de Quito, después de un informe que tuve a honra presentar, ha hecho varias indemnizaciones por accidentes de trabajo a sus operarios.

Cosa muy distinta es querer aplicar las leyes del trabajo a los empleados públicos municipales, que forman parte integrante del personal administrativo, sometidos a una disciplina especial y cuyos sueldos constan en el Presupuesto, la más importante Ordenanza Municipal. El Estado ecuatoriano, el Gobierno Central, convencido con suma razón, de que la Ley de Desahucio del Trabajo no se aplica a los funcionarios y empleados públicos, ha reorganizado súbitamente diversas oficinas. Antes tuvo la misma actitud el Municipio con la Policía Municipal. La Ley del Desahucio del Trabajo no se aplicó, entonces en favor de los celadores que no continuaban en sus cargos. Que trastorno tan espantoso sucedería en el personal administrativo, que integra la Corporación misma de Derecho Público, si indiscretamente se aplicara a nuestros funcionarios públicos las leyes del trabajo?.....Nuestras leyes del trabajo copian a veces hasta textualmente expresiones de las leyes análogas de la República del Uruguay, en esta República se hace aplicación estricta de las leyes del trabajo a los empleados de fábricas, talleres, establecimientos industriales, minas, construcciones, etc., etc.

Las razones jurídicas que desenvuelven los anteriores principios quedan expresadas en mis informes N°. 17 de 8 de febrero de 1930, N°. 24 del mismo mes y año y N°. 11 del 11 del presente mes.

Protesto sinceramente que nada quiero prevenir la muy respetable opinión del I. Concejo sino que mi deseo es contribuir para que se aclare un problema de suma trascendencia.

*J. M. Velasco Ibarra.*



## CAPITULO SEGUNDO

### INFORME DEL PROCURADOR SINDICO ACERCA DE SI LA LEY DE DESAHUCIO DE TRABAJO DE 6 DE OCTUBRE DE 1928 PUEDE APLICARSE A LOS EMPLEADOS PUBLICOS

Jurisprudencia sentada por el Concejo en  
sesión de 12 de febrero de 1930.

Informe N°. 17.— Sindicatura Municipal.—  
Quito, a 8 de febrero de 1930.

Señor Presidente del I. Concejo Municipal.

Quince individuos, que fueron celadores de  
la Policía Municipal, exponen lo siguiente:

Desde algún tiempo, dicen, han prestado  
sus servicios en calidad de celadores, sin dar  
motivos de queja;

Cuando creían tener asegurada su coloca-  
ción y con ella el sustento diario de sus fami-  
lias, el primero de este año inesperada y sor-  
presivamente, fueron separados de sus cargos  
porque el I. Concejo resolvió reducir el perso-  
nal de la Policía Municipal;

No creen justo que el rato menos pensa-  
do, sin previo aviso, se quite el destino a un  
hombre, sin razón ni motivo, y se le deje vir-  
tualmente parado en la calle, sin tener con que  
atender a las necesidades propias y de la  
familia.



Entienden que la Ley sobre Desahucio de Trabajo, ampara también a los empleados públicos; y aún cuando la ley no los ampara —concluyen los solicitantes— que la justicia y la humanidad harán que su petición sea atendida por el I. Concejo.

Hasta aquí la solicitud de los ex-celadores. El señor Presidente ha decretado al pie de ella ésto: «Informe previamente el señor Procurador Síndico del Concejo». En virtud de esta orden, estoy en la obligación de informar y exponer mis ideas respecto a la solicitud a que acabo de referirme.

*Planteamiento del asunto:* Existe en verdad la Ley de Desahucio de Trabajo de 6 de octubre de 1928. El Art. 1º de la Ley dice que ésta rige todo contrato de trabajo que se haya celebrado entre un patrono y un obrero, empleado o dependiente. Y el Art. 3º dice: el patrono que separare intempestivamente, esto es, sin el aviso anticipado de un mes por lo menos al obrero o empleado, quedará obligado a pagar al obrero o empleado la indemnización correspondiente a un mes de salario computado según el jornal. El Art. 15 dice: que el obrero o empleado que hubiera trabajado más de un año, tendrá derecho a una indemnización equivalente al sueldo de dos meses, sobre la base de los últimos salarios, y que el obrero o empleado que hubiere trabajado más de dos años, tendrá derecho a ser indemnizado con una suma equivalente a un mes de salario por cada uno de los años de labor.

Yo debo estudiar simplemente si entre los celadores de la Policía Municipal y el Concejo hay un contrato de trabajo. Si lo hay, por disposición de la Ley el Municipio está obligado a la indemnización legal. Si entre los celadores de la Policía Municipal no hay un contrato de trabajo no me toca a mí indicar lo que deba hacer el I. Concejo. Se trata entonces de actos y medidas simplemente administrativas. El Con-



cejo sabrá tomar las medidas administrativas que crea impuestas por la equidad y que guarden armonía con el orden presupuestario y económico de la Corporación.

*Los principios:* La solicitud de los celadores de la Policía Municipal tiene gran importancia, ya que establece precedentes. Mañana el Concejo resta su confianza a un empleado municipal y cancela su nombramiento por motivos de interés público. El empleado reclamará la indemnización prevista en la Ley de Desahucio de Trabajo. El 31 de diciembre de 1930, el I. Municipio aprueba el Presupuesto para 1931, y, por motivos de economía pública, por falta de rentas, suprime una dependencia municipal o elimina tales o cuales cargos. Según lo que el Concejo establezca a propósito de la solicitud de los celadores, los empleados agraviados —en la hipótesis que pongo— reclamarán la indemnización prevista por la Ley.

¿Existe, pues, un verdadero contrato de trabajo entre un celador municipal y el I. Concejo? El nombramiento de un celador municipal, de un Comisario Municipal, de un amanuense municipal, etc. ¿es lo mismo que el acto mediante el cual un individuo contrata con un operario la realización de una obra, o el acto mediante el cual el mismo Municipio contrata con un carpintero la fabricación de escritorios, de puertas, o con un albañil la construcción de una casa?

Hay que distinguir detenidamente entre los actos en que el Municipio presta a la comunidad los servicios esenciales para los que el Municipio existe como persona de Derecho Público, como autoridad, de los actos que el Municipio realiza en el orden económico, en el orden civil, en las mismas condiciones en que los realizan los particulares. Los particulares compran, venden, contratan obras, construcciones, etc., etc. También el Municipio, además de ser persona de Derecho Público, realiza actos



de esta clase, que son propiamente actos de derecho civil: también el Municipio compra, vende, contrata la ejecución de obras, la realización de muebles, la elevación de edificios, etc., etc. La Ley de Desahucio de Trabajo se aplica ya a los particulares, ya a las personas de Derecho Público en cuanto contratan con un obrero, con un empleado la realización de un trabajo de los enumerados antes mediante actos de derecho civil, de carácter económico. Contrata el Municipio con carpinteros y albañiles la construcción de una obra mediante un determinado precio, determinadas condiciones y especificaciones. Súbitamente el Municipio despide a los trabajadores, el Municipio, como cualquier particular, está obligado a pagar la indemnización legal, porque la ley positiva sobre desahucio de trabajo no quiere que los trabajadores vivan en la más grande inseguridad a pesar de cumplir con sus deberes.

Pero, ¿pasará lo mismo cuando se trata de cancelar el nombramiento de los celadores, Comisarios, amanuenses? ¿Se podrá hablar de un contrato de trabajo entre los propiamente empleados del Municipio? ¿Se podrá hablar en este caso de arrendamiento de servicios personales? Los empleados, los agentes, los funcionarios, mediante los cuales el Estado o el Municipio realizan sus servicios propios, como personas de Derecho Público, no son arrendadores de servicios personales, no media entre el funcionario, de un lado, y el Estado o el Municipio, de otro, un contrato de trabajo. Para que hubiera un contrato de trabajo sería menester que el Estado o el Municipio, de un lado, y el empleado de otro, puedan discutir libremente de salarios, condiciones de la obra o del servicio, medios de llevarlo a cabo, etc., etc.

Tratándose de funciones públicas, nada de esto pasa ni puede pasar. El Estado o el Municipio establecen en el Presupuesto un sueldo fijo, determinado e indiscutible; y las condicio-



nes del servicio no pueden ser otras pue las impuestas en la Ley y en los Reglamentos. El candidato a un empleo admite o no admite lo previsto en el Presupuesto, en la Ley y en el Reglamento. Si lo admite, recibe su nombramiento, y se encuadra en la función, y no es ni puede ser mirado como un obrero contratado para un trabajo, sino que es un agente del servicio público, protegido por la Ley, un representante de la soberanía, según el lenguaje corriente. Tan sólo su resolución, me permitirá citar algunas autoridades al respecto. Hauriu dice que en la situación del funcionario no hay los elementos de forma ni de fondo del contrato —y continúa—: no hay determinación del objeto del contrato, ya que el objeto está determinado en la ley y reglamentos; no hay cambio de consentimientos, ni siquiera el contrato tácito. Las ideas falsas aunque sean teóricas, agrega, acaban por producir inconvenientes. A fuerza de oír decir que no son sino asalariados comparables a los obreros y a los empleados de la industria privada, los agentes y sub-agentes de la administración pública han concluido de que podían declararse en huelga.

El Profesor Posada dice: La relación del empleado es una relación jurídica *sui-générís*, sin nombre en la técnica civil; en la forma no se trata sólo de contratos civiles, ya que la relación de empleo es una función, es una relación jurídico-político. Refiriéndose al concepto práctico de los Estados, dice el señor Posada: en general no se admite que la relación de empleo suponga el posible acuerdo contractual de dos voluntades: el empleo es una función que el Estado organiza y cuyo desempeño acepta el empleado, sometiéndose a las condiciones que el Estado impone.

Sí los celadores de policía son empleados no pueden invocar en su favor las leyes sobre el contrato de trabajo, pero, estudiemos ya las disposiciones positivas de nuestras leyes.



*El sistema legislativo municipal.*—El celador municipal no es un obrero ni puede asimilarse al empleado de una fábrica particular. El celador municipal representa al Municipio en la realización por éste de los fines esenciales para que exista el Municipio. El celador municipal es el funcionario, un servidor público, una autoridad con derechos muy trascendentales en el movimiento de la ciudad y aún respecto a la libertad individual. La función de la policía es tan fundamental en el Municipio como que es el fin principal de la vida y soberanía del Municipio. El Art. 1º. del Código de Policía dice: La Policía se divide en Nacional y Municipal. El Código antedicho —Art. 4º.— determina los objetos de la Policía Municipal: aseo, ornato de de las casas, plazas y lugares públicos, salubridad e higiene públicas, abasto público, etc., etc. El Art. 9º. dice que la Policía Municipal depende directamente del Municipio Cantonal y que las Municipalidades están obligadas a sostener la Policía Municipal. El Art. 10 dice que las Municipalidades expedirán los nombramientos respectivos de Policía. El Art. 16 resuelve definitivamente nuestro problema. Dice que la Autoridad de Policía se ejerce por los funcionarios y agentes del ramo. Y el Art. 18 enumera los celadores entre los Agentes de Policía. El Art. 149 del mismo Código dice que los Agentes de Policía, es decir: los celadores, están en la obligación estricta de conducir ante las autoridades competentes a los contraventores que fueren encontrados por ellos en la perpetración o inmediatamente después de la perpetración de una contravención. Es decir, definitivamente los Agentes de Policía no son obreros ni asimilables al empleado de una fábrica; son los órganos mediante los cuales el Municipio realiza su función como soberano y ordenador de una localidad.

Además la Ley de Desahucio de Trabajo, de 6 de octubre de 1928, habla del contrato de



trabajo. Si queremos saber a qué clase de contratos de trabajo se refiere, hemos de acudir a la Ley de 6 de octubre de 1928, es decir, de la misma fecha, sobre el contrato de trabajo; y a la cual se refiere la Ley de Desahucio de Trabajo. Dice la Ley sobre contratos de trabajo, en su Art. 1º.: «Para los efectos de esta Ley entiéndese por patrono, toda persona natural o jurídica, inclusive el Estado, las Municipalidades y demás Instituciones o Corporaciones de Derecho Público que, con capitales propios o como contratista, (llamo la atención sobre lo siguiente) TOME A SU CARGO LA EJECUCION DE UN TRABAJO, LA EXPLOTACION DE UNA INDUSTRIA O LA DIRECCION O ADMINISTRACION DE UNA EMPRESA CUALQUIERA, CONTRATANDO LOS SERVICIOS DE EMPLEADOS, DEPENDIENTES U OBREROS. El asunto es claro: no se puede citar para reclamar indemnizaciones de trabajo las leyes sobre esta materia, sino cuando se trate de los obreros o empleados que contrate el Concejo para sus diversas obras de construcción, de fabricación, de rellenos, etc., etc., pero no al tratarse de los servicios públicos como el de Policía, regidos por una ley y por reglamentos. Nadie dirá que el servicio de Policía es la ejecución de un trabajo de carácter civil o económico, la explotación de una industria o la dirección o administración de una empresa. No creo, por consiguiente, que la Ley sobre Desahucio de Trabajo favorezca a los ex-celadores municipales.

*La situación actual.*—Lo que motiva la solicitud de los ex-celadores municipales es una medida de administración municipal en interés del servicio público y mediante un acto de soberanía municipal. La letra d) N.º 1.º del Art. 11 del Presupuesto Municipal para 1929 decía: «hasta ochenta celadores a un sueldo sesenta centavos diarios cada uno,..... S/. 46.720,00 por año». La letra b) del Art. 11, N.º 1.º del Presupuesto para 1930 dice: «hasta treinta y



nueve celadores a dos sueres diarios cada uno, S/. 28.470,00». Se han visto, pues, separados de sus cargos cuarenta y un celadores. La situación económica de ellos no puede ser más grave. El I. Concejo, en su prudencia, determinará si hay o no una forma equitativa de indemnizar a los celadores destituidos. Sobre todo se deberá desear una ley que provea a estos casos y garantice a los funcionarios públicos. De otro modo se producen males irremediables, a veces, ya que las personas de Derecho Público sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Los particulares pueden hacer todo cuanto la ley no les prohíbe. Las personas de Derecho Público están sometidas al principio contrario. Además, según el Art. 60 de la Ley de Régimen Municipal, todos los empleados municipales son de libre nombramiento y remoción del Concejo y según la Ley de Elecciones los empleados son nombrados cada año. Como el año pasado los celadores de Policía no contribuían con el respectivo descuento para los fondos de la Caja de Pensiones, desgraciadamente no están protegidos por el Art. 32 de la Ley de Jubilación, Montepío Civil y Cooperativa que, cuando un empleado es removido, da derecho a reintegro de todo lo que hubiere consignado en la Caja por jubilaciones.

Esta franca opinión someto al más acertado parecer del I. Concejo Municipal, reconociendo el enorme fondo moral y racional que tienen los solicitantes y deseando que sea posible alguna medida administrativa que permita indemnizar a los ex-celadores separados el 1º de enero de este año.

*J. M. Velasco Ibarra.*



## CAPITULO TERCERO

### JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA.—PAGO DE HONORARIOS A LOS PERITOS QUE GOZAN DE SUELDO

Informe de la Comisión de Hacienda aprobado en la sesión del 5 de julio de 1933.

La acepción española de la palabra sueldo es ésta: «Remuneración asignada al individuo por el desempeño de un cargo o servicio profesional. Suele fijarse por anualidades».

En sentido económico la propia palabra quiere decir: «Retribución fija que los funcionarios públicos reciben por los servicios permanentes que prestan al Estado o a los pueblos».

El señor Tesorero Municipal ha puesto reparo a la orden expedida por S. S. para el pago al señor Ingeniero don Jorge Albornoz Bustamante, como perito dirimente en el juicio de expropiación seguido por el I. Concejo contra las señoritas Concepción y Luz María de la Torre, reparo que se funda en el supuesto de que dicho pago contravendría el Art. 165 de la Constitución de la República, artículo que establece que, «nadie podrá gozar de dos sueldos provenientes de fondos públicos en ninguna forma ni a título de contrato ni aunque sean diversas las oficinas que los pague».

La mera transcripción del sentido castizo del vocablo y del mandamiento constitucional citado, ponen de relieve la falta de fundamento



del señor Tesorero en sus recelos, por mucho que agregue que esta manera suya de conceptuar la referida prohibición constitucional, se halla de acuerdo con el dictamen de la Contraloría General de la Nación; pues mientras el significado del término «sueldo» es, precisamente, el mismo en que nuestra Carta Política lo emplea, la acepción que parece quererle dar el señor Tesorero es, por demasiado lata, arbitraria y no fundada en criterio legal de ninguna suerte.

Para no entrar en disquisiciones en asunto tan claro, bástanos citar algunos casos semejantes al en que se encuentra el Ingeniero señor Albornoz:

¿Perciben o no derecho los Conjuces de los Tribunales de Justicia, llamados por éstos, siendo, a la vez, profesores de la Universidad? ¿Lo perciben los Médicos llamados a intervenir en diligencias judiciales para investigaciones de crímenes y delitos, cuando son, al propio tiempo, profesores de las Universidades, Cirujanos de Ejércitos, Asistentes de Hospitales, etc.?

Entendemos que sí; agregamos que la Contraloría General no podría poner objeciones a los pagos que las Tesorerías Fiscales efectuasen por concepto de los servicios que estos profesionales prestasen ocasionalmente, como el señor Ingeniero Albornoz ha prestado los suyos en el caso cuestionado.

La Comisión de Hacienda opina, pues, salvo el mejor dictamen del Concejo, que S. S. insiste en la orden emitida.

Quito, a 5 de julio de 1933.

LA COMISION,

*L. E. Escudero.*

*Manuel Bustamante.*



## CONCLUSIONES

### POCAS Y BREVES

Esta sencilla Codificación comprende únicamente las Ordenanzas Municipales vigentes y las Leyes que con ellas se relacionan. Constata las sucesivas reformas introducidas por el Cabildo de la Ciudad hasta diciembre de 1934, la jurisprudencia administrativa de esta Corporación y las referencias —aunque incompletas, seguramente— a nuestra Legislación Positiva. En ciertas Ordenanzas, para su mayor claridad, se han puesto las notas del caso.

De acuerdo con las sabias advertencias del Maestro de la Jurisprudencia Ecuatoriana, Sr. Dr. Dn. Manuel R. Balarezo, se han hecho algunas reformas al presente trabajo; mas aún, su plan integral, de distribución, ha variado del todo. Antes de presentar mi tesis al H. Tribunal de la Universidad Central, pensé que debía meditar y corregir todo lo posible.

En medio de esta abundancia de Legislación Municipal hay mucho que modificar, compaginando las disposiciones legales-locales, con la marcha ascendente colectiva-local, con sus intereses y aspiraciones. Hay Ordenanzas, como la de ornato público, de 1890, que apenas pocas de sus disposiciones podrían aplicarse eficientemente a la fecha; Ordenanzas como la de agua potable que poco o nada sirven en los actuales momentos. La costumbre, la prácti-



ca administrativa ha subido en un gran porcentaje esta inaplicabilidad —en partes— de la Legislación Municipal.

Acaso convendría una revisión total de las Ordenanzas Municipales, agrupándolas por calidades, por los fines que persiguen: *de urbanización*, unas, que comprendería desde la de barrios nuevos —que tan graves problemas trae al Municipio su formación— la de ornato público, agua potable, desagües, fábricas, panaderías, etc. hasta las relacionadas con la higiene de la habitación. Otras, nueva serie —de contabilidad, fiscalización, remates, almacenes—. Una nueva sección —esencial en la economía municipal y en la vida de la comuna— la de Impuestos Municipales. Es decir, precisa la unificación de todas estas Ordenanzas en un solo CODIGO, en un solo LIBRO, cuyos capítulos serían las diferentes actividades del Municipio. Proceso de revisión, que si bien requiere hondo estudio y paciencia, de llevarlo a cabo, redundaría en positivos beneficios para la colectividad. El campo de acción municipal —mucho más amplio y complejo desde que se dictaron las Leyes de Autonomía Económica de los Municipios— ha ido aumentando a través de los años. Sin embargo, muchísimas Ordenanzas han permanecido invariables. La labor de unificación de las Ordenanzas Municipales, es labor que se impone.